Dictamen recaído en los Proyectos de Ley 4753/2022-CR; 7429/2023-CR; 7689/2023-CR; 8350/2023-CR; 8763/2024-CR y 9138/2024-CR, mediante el cual se propone, con texto sustitutorio, la "Ley que modifica la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, a fin de reconocer como violencia la desaparición por particulares e incorporar el botón de pánico como medio de protección".

CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Área de Trámite Documentario
02 DIC. 2024
RECIBIDO
Firma: Hora: 14:30h.

COMISIÓN DE MUJER Y FAMILIA
Período Anual de Sesiones 2024-2025
DICTAMEN 09

Señor presidente:

Han sido remitidos para estudio y dictamen de la Comisión de la mujer y Familia, de conformidad con los artículos 34 y 77 del Reglamento del Congreso de la República, las siguientes iniciativas legislativas:

- **Proyecto de Ley 4753/2022-CR**[1], presentado por el grupo parlamentario **Fuerza Popular**, a iniciativa[2] de la congresista **Auristela Ana Obando Morgan**, mediante el cual se propone facilitar el acceso público y sin restricciones al registro único de víctimas y agresores (RUVA), para cuyo efecto se plantea modificar el artículo 42 de la ley 30862.

- **Proyecto de Ley 7429/2023-CR**[3], presentado por el grupo parlamentario **No Agrupados**, a iniciativa[4] de la congresista **Jhakeline Katy Ugarte Mamani**, mediante el cual se propone modificar el artículo 7-B de la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

- **Proyecto de Ley 7689/2023-CR**[5], presentado por el grupo parlamentario **Perú Bicentenario**, a iniciativa[6] del congresista **Guido Bellido Ugarte**, mediante el cual se propone modificar los artículos 8, 15, 16 y 22 de la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, reconociendo la desaparición como un tipo de violencia y disponer medidas para eliminar barreras en el acceso a la justicia.

---

[1] https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/OTU1NDY=/pdf

[2] Y en su condición de coautores los señores congresistas: Barbarán Reyes, Rosangella Andrea; Infantes Castañeda, Mery Eliana; Olivos Martínez, Vivian; Cordero Jon Tay, María Del Pilar; y, Flores Ruiz, Víctor Seferino.

[3] https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTczMzAw/pdf

[4] Sin coautores.

[5] https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTc5NjY4/pdf

[6] Y en su condición de coautores los señores congresistas: Coayla Juárez, Jorge Samuel; Varas Meléndez, Elías Marcial; Balcázar Zelada, José María.

- **Proyecto de Ley 8350/2023-CR**[7], presentado por el grupo parlamentario **Avanza País - Partido de Integración Social**, a iniciativa[8] de la congresista **Yessica Rosselli Amuruz Dulanto**, mediante el cual se propone modificar la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, y el Código Penal, Decreto Legislativo 635, con la finalidad de incorporar como tipo de violencia el ciberacoso.

- **Proyecto de Ley 8763/2024-CR**[9], presentado por el grupo parlamentario **Bloque Democrático Popular**, a iniciativa[10] del congresista **Edgar Cornelio Reymundo Mercado**, mediante el cual se propone la instalación de la herramienta tecnológica denominada " botón de pánico" desde el momento de la denuncia policial en el celular de la denunciante de víctima de violencia, en el marco de la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

- **Proyecto de Ley 9138/2024-CR**[11], presentado por el grupo parlamentario **Perú Libre**, a iniciativa[12] del congresista **Isaac Mita Alanoca**, mediante el cual se propone modificar el artículo 8 de la Ley 30364, a través de la incorporación del numeral 5 en el literal d), para prevenir la violencia económica contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, y para prevenir la vulneración de los derechos de los alimentistas por la demora en el pago de pensiones alimenticias y evitar que el deudor alimentario pueda demandar la patria potestad del alimentista.

Luego del análisis y debate correspondiente la Comisión de la Mujer y familia en su Octava Sesión Ordinaria, del 25 de noviembre de 2024, realizada en la modalidad mixta, en la sala "Francisco Bolognesi", Palacio Legislativo **[presencial]** y en la sala de reuniones de la plataforma[13] de videoconferencia del Congreso de la República

---

[7] https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MjAzNjgx/pdf

[8] Y en su condición de coautores los señores congresistas: Cavero Alva, Alejandro Enrique; Chirinos Venegas, Patricia Rosa; Gonzales Delgado, Diana Carolina; Tudela Gutiérrez, Adriana Josefina; y Williams Zapata, José Daniel.

[9] https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MjExNzc4/pdf

[10] Y en su condición de coautores los señores congresistas: Cortez Aguirre, Isabel; Bazán Narro, Sigrid Tesoro; y Paredes Piqué, Susel Ana María.

[11] https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MjIxOTM3/pdf

[12] Y en su condición de coautores los señores congresistas: Cruz Mamani, Flavio; Balcázar Zelada, José María; Cerrón Rojas, Waldemar José; Portalatino Ávalos, Kelly Roxana; y Taipe Coronado, María Elizabeth.

[13] Según lo establecido en los artículos 27-A y 51-A del Reglamento del Congreso de la República. Se utilizó la herramienta de *Microsoft Teams*.

[**virtual**], acordó por **UNANIMIDAD** aprobar[14] el dictamen recaído en los **Proyectos de Ley 4753/2022-CR; 7429/2023-CR; 7689/2023-CR; 8350/2023-CR; 8763/2024-CR y 9138/2024-CR**, con texto sustitutorio, mediante el cual se propone la *Ley que modifica la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familia, a fin de reconocer como violencia la desaparición por particulares e incorporar el botón de pánico como medio de protección*, con el **voto A FAVOR (13) de los congresistas**: *Alcarraz Aguero, Yorel Kira (PP); Barbarán Reyes, Rosangella Andrea (FP); Córdova Lobatón, María Jessica (RP); Infantes Castañeda, Mery Eliana (FP); Jáuregui de Aguayo, Milagros (RP); Limachi Quispe, Nieves Esmeralda (JPP); Muñante Barrios, Alejandro (RP); Pablo Medina, Flor Aidee (NA); Portero López, Hilda Marleny (AP); Santisteban Suclupe, Magally (FP); López Morales, Jeny Luz (FP); Taipe Coronado, María Elizabeth (PL) y Vázquez Vela, Lucinda (BMCN).*

Presentó **licencia (01)** para esta sesión el congresista: *Cerrón Rojas, Waldemar José (PL).*

I. SITUACIÓN PROCESAL

a. Antecedentes procedimentales

El **Proyecto de Ley 4753/2022-CR** ingresó al Área de Trámite Documentario el 18 de abril de 2023 y fue decretado el 21 del mismo mes a las comisiones Justicia y Derechos Humanos y de Mujer y Familia, como primera y segunda comisión dictaminadora, respectivamente.

El **Proyecto de Ley 7429/2023-CR** ingresó al Área de Trámite Documentario el 2 de abril de 2024 y fue decretado el 4 del mismo mes a las comisiones de Mujer y Familia, y Justicia y Derechos Humanos, como primera y segunda comisión dictaminadora, respectivamente.

El **Proyecto de Ley 7689/2023-CR** ingresó al Área de Trámite Documentario el 25 de abril de 2024 y fue decretado el 29 del mismo mes a las comisiones de Justicia y Derechos Humanos y de Mujer y Familia, como primera y segunda comisión dictaminadora, respectivamente.

El **Proyecto de Ley 8350/2023-CR** ingresó al Área de Trámite Documentario el 8 de julio de 2024 y fue decretado el 10 del mismo mes a las comisiones de Justicia y Derechos Humanos y de Mujer y Familia, como primera y segunda comisión dictaminadora, respectivamente.

---

[14] **Se solicitó autorización para la ejecución de los acuerdos**, aprobándose por **UNANIMIDAD, considerando la dispensa del trámite de aprobación del acta** y de su lectura.

El **Proyecto de Ley 8763/2024-CR** ingresó al Área de Trámite Documentario el 2 de setiembre de 2024 y fue decretado el 3 del mismo mes a las comisiones de Mujer y Familia, y Justicia y Derechos Humanos, como primera y segunda comisión dictaminadora, respectivamente.

El **Proyecto de Ley 9138/2024-CR** ingresó al Área de Trámite Documentario el 9 de octubre de 2024 y fue decretado el 10 del mismo mes a las comisiones de Justicia y Derechos Humanos y de Mujer y Familia, como primera y segunda comisión dictaminadora, respectivamente.

b. Cumplimiento de los requisitos reglamentarios

Los **Proyectos de Ley 4753/2022-CR; 7429/2023-CR; 7689/2023-CR; 8350/2023-CR; 8763/2024-CR y 9138/2024-CR** que son materia de evaluación y pronunciamiento, han sido remitidos a esta Comisión de conformidad con el artículo 77 y cumplen con los requisitos formales señalados en el artículo 75 del Reglamento del Congreso.

II. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS LEGISLATIVAS

2.1. Proyecto de Ley 4753/2022-CR

El **Proyecto de Ley 4753/2022-CR** propone la *Ley que facilita el acceso público y sin restricciones a la información de los registros únicos de víctimas y agresores (RUVA)*, busca modificar el artículo 42 de la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, con el propósito principal de garantizar el acceso público y sin restricciones a la información contenida en el Registro Único de Víctimas y Agresores (RUVA)[15]. Se identifica en la iniciativa legislativa los siguientes puntos clave:

a. **Objeto de la ley**: Facilitar el acceso público y sin restricciones al RUVA y al Registro Nacional de Condenas (RNC), promoviendo la transparencia y accesibilidad a información clave relacionada con casos de violencia.

b. **Modificación del artículo 42 de la Ley 30364**: Se establece que la información del RUVA sea pública y accesible a través de la página web del Poder Judicial, eliminando restricciones para cualquier ciudadano que desee consultarla.

---

[15] El RUVA se define como un banco de datos intersectorial que registra información sobre las víctimas y sus agresores, sus antecedentes, las denuncias presentadas, las atenciones recibidas, entre otros. La finalidad del RUVA es facilitar la identificación y el perfilamiento de víctimas y agresores para mejorar la acción preventiva, investigativa y sancionadora de los operadores de justicia; además, apoyar a las instituciones competentes en la toma de decisiones orientadas a erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

En suma, este proyecto responde a la necesidad de consolidar esfuerzos interinstitucionales (Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, entre otros) para combatir la violencia de género y la violencia familiar. La medida busca fortalecer las políticas públicas con base en datos confiables y accesibles.

Según la Exposición de Motivos de la iniciativa legislativa, la propuesta responde a la urgente necesidad de combatir el aumento de casos de violencia de género y familiar, permitiendo que la sociedad civil, las víctimas y los operadores de justicia cuenten con herramientas para identificar antecedentes de agresores y tomar decisiones informadas. Asimismo, busca fortalecer la transparencia y la acción interinstitucional entre entidades como el Poder Judicial, Ministerio Público y Policía Nacional, respetando las disposiciones legales sobre protección de datos personales y priorizando el interés público en la lucha contra la violencia.

Respecto del *Costo-beneficio*, según la autora de la iniciativa legislativa, no genera gasto adicional al Estado; sino, promueve la transparencia, fortalece la lucha contra la violencia y permite a la ciudadanía conocer antecedentes de agresores. Respecto de su *Impacto normativo*, no contradice la Constitución y se alinea con el Acuerdo Nacional en materia de seguridad ciudadana y erradicación de la violencia.

2.2. Proyecto de Ley 7429/2023-CR

El **Proyecto de Ley 7429/2023-CR** propone la *Ley que amplia los sujetos de protección en la Ley 30364*, y tiene como objetivo modificar el artículo 7 de la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Esta modificación busca ampliar los sujetos de protección bajo esta normativa. Se identifica en la iniciativa legislativa los siguientes puntos clave:

a. **Objeto de la ley**: Ampliar los sujetos de protección establecidos en la Ley 30364.

b. **Modificación del artículo 7 de la Ley 30364**: Se amplía como sujetos de protección a los novios, esponsales y cualquier persona con un vínculo amoroso-afectivo comprobado.

En suma, este proyecto reconoce que la violencia no solo ocurre en el ámbito familiar o con convivientes/cónyuges, sino también en relaciones sentimentales fuera de la convivencia. La propuesta busca proteger a individuos que no están cubiertos actualmente bajo la normativa vigente, pero que están expuestos a violencia debido a vínculos afectivos.

Según la Exposición de Motivos de la iniciativa legislativa, la propuesta responde a que la violencia no se limita solamente a relaciones de convivencia ni a vínculos

formales. Desde la perspectiva de la autora, existen actos de violencia psicológica, física o incluso económica en relaciones de noviazgo, esponsales o vínculos afectivos similares. Estas relaciones, al no estar incluidas en el marco legal vigente, dejan desprotegidas a las víctimas frente a posibles agresiones. En esa línea, el *amor romántico*, entendido como un modelo de relación que puede justificar actitudes de control, celos o manipulación, es señalado como un ámbito donde también puede surgir violencia. Entonces, incluir estas relaciones dentro de la normativa busca prevenir actos de violencia y proteger a quienes se encuentran en estas dinámicas. Así, la ley actual protege a cónyuges, convivientes y familiares, pero deja fuera a parejas sentimentales sin convivencia, lo que representa una laguna en el marco de protección. El proyecto busca subsanar esta omisión al ampliar el artículo 7-B para incluir a novios, esponsales y cualquier relación afectiva demostrable.

Respecto del *Costo-beneficio*, según la autora de la iniciativa legislativa, no genera gasto adicional para el erario público, ya que únicamente amplía los sujetos de protección sin modificar procesos operativos existentes. Respecto de su *Impacto normativo*, no contradice la Constitución y se alinea con el Acuerdo Nacional en materia de erradicación de la violencia, y solo modifica el artículo 7-B de la Ley 30364.

2.3. Proyecto de Ley 7689/2023-CR

El **Proyecto de Ley 7689/2023-CR** propone la *Ley que modifica la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, reconociendo la desaparición como un tipo de violencia*, y tiene como objetivo modificar los artículos 8, 15, 16 y 22 de la Ley 30364, para reconocer la violencia por desaparición como un tipo de violencia dentro de esta normativa. Además, propone disposiciones específicas para mejorar el acceso a la justicia y la protección de las víctimas y sus familiares. Se identifica en la iniciativa legislativa los siguientes puntos clave:

a. **Objeto de la ley**: Reconocer la violencia por desaparición como un tipo de violencia en la Ley 30364.

b. **Modificación del artículo 8**: Se incorpora un nuevo tipo de violencia denominado *violencia por desaparición*, definida como las acciones llevadas a cabo para desaparecer a mujeres por su condición de tales o contra cualquier integrante del grupo familiar.

c. **Modificación del artículo 15:** Para reemplazar la frase *con el único requisito de que el denunciante sea debidamente identificado* por *el denunciante debe ser identificado.*

d. **Modificación del artículo 16:** Para reemplazar la frase (en el literal d) *independientemente del nivel de riesgo* por *priorizando el nivel de riesgo.*

e. **Modificación del artículo 22:** Para incluir en el numeral 10 el tratamiento psicológico para los familiares de hasta segundo grado de consanguinidad en casos de violencia por desaparición, además de la víctima directa.

En suma, este proyecto reconoce a la violencia por desaparición como un tipo de violencia dentro de la Ley 30364. Además, propone disposiciones específicas para mejorar el acceso a la justicia y la protección de las víctimas y sus familiares.

Según la Exposición de Motivos de la iniciativa legislativa, la propuesta responde a a una realidad alarmante en la que, según datos recientes se reportaron 31,715 mujeres desaparecidas entre enero de 2021 y agosto de 2023, de las cuales solo el 48% fueron ubicadas. Durante 2023, hubo un incremento en las desapariciones de mujeres, especialmente de niñas y adolescentes, y un vínculo preocupante con el feminicidio. La iniciativa subraya la necesidad de abordar esta problemática como un tipo específico de violencia de género para garantizar una respuesta más efectiva del Estado.

Respecto del *Costo-beneficio,* según el autor de la iniciativa legislativa, la propuesta no implica gasto adicional para el Estado, ya que únicamente amplía una forma de violencia, en todo caso, los costos se financiarían con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas. Respecto de su *Impacto normativo,* no contradice la Constitución y se alinea con el Acuerdo Nacional en materia de erradicación de la violencia, y solo modifica los artículos 8, 15, 16 y 22 de la Ley 30364.

2.4. Proyecto de Ley 8350/2023-CR

El **Proyecto de Ley 8350/2023-CR** propone la *Ley que incorpora como tipo de violencia el ciberacoso,* y tiene como objetivo incorporar el ciberacoso como un tipo de violencia dentro de la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Asimismo, propone modificar el Código Penal peruano para incluir el ciberacoso como un delito penal tipificado. Se identifica en la iniciativa legislativa los siguientes puntos clave:

a. **Objeto de la ley**: Modificar la Ley 30364 para incluir el ciberacoso como una forma de violencia, reconociendo los actos de acoso o intimidación cometidos mediante tecnologías de la información y comunicación. Además, incorporar un nuevo artículo al Código Penal que establezca sanciones específicas para el delito de ciberacoso.

b. **Modificación del artículo 8**: Se describe como actos de acoso o intimidación a través de tecnologías como teléfonos móviles, internet, redes sociales, videojuegos, mensajes de texto, correos electrónicos, entre otros, que ocasionan un menoscabo en la dignidad y el honor de las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

c. **Modificación del Código Penal:** Se propone un nuevo artículo (176-D), que sanciona el ciberacoso con pena privativa de libertad de dos a cinco años, multa e inhabilitación.

En suma, este proyecto responde a la creciente incidencia del ciberacoso como una manifestación de violencia, visibilizando su impacto y estableciendo un marco normativo más robusto para su combate.

Según la Exposición de Motivos de la iniciativa legislativa, la propuesta aborda el ciberacoso como una forma emergente y alarmante de violencia que afecta principalmente a mujeres, niños y adolescentes, quienes representan los grupos más vulnerables en el ámbito digital. Según el Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, los casos de ciberacoso han aumentado de manera sostenida, lo que evidenciaría la insuficiencia del marco normativo actual para prevenir y sancionar esta conducta. En ese contexto, el proyecto se fundamenta en los compromisos internacionales del Perú, como la Convención de Belém do Pará y la CEDAW, que exigen medidas efectivas para erradicar la violencia de género en todas sus manifestaciones, incluyendo la digital, destacando la urgencia de garantizar protección, justicia y reparación para las víctimas mediante la tipificación penal del ciberacoso y su reconocimiento como una modalidad de violencia en la Ley 30364.

Respecto del *Costo-beneficio*, según la autora de la iniciativa legislativa, la propuesta no genera gasto al erario nacional, por tratarse de la incorporación del tipo penal Ciberacoso y su sanción, de haber costos estos se financiarían con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas. Respecto de su *Impacto normativo*, no contradice la Constitución y se alinea con el Acuerdo Nacional en materia de erradicación de la violencia, y solo busca actualizar la legislación, incorporando primero el ciberacoso como un nuevo tipo de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar y, seguidamente, establecer en el Código Penal, la tipificación del ciberacoso como un delito y su consiguiente sanción penal, para quienes lo cometan.

2.5. Proyecto de Ley 8763/2024-CR

El **Proyecto de Ley 8763/2024-CR** propone la *Ley que establece la instalación del botón de pánico desde la formulación de la denuncia policial por violencia contra la mujer e*

integrantes del grupo familiar, y tiene como objetivo incorporar un mecanismo inmediato de auxilio y protección para víctimas de violencia mediante la implementación del Botón de Pánico en los celulares de las denunciantes. Se identifica en la iniciativa legislativa los siguientes puntos clave:

a. **Objeto de la ley**: Establecer la instalación de la herramienta tecnológica denominada "Botón de Pánico" desde el momento de la denuncia policial en el celular de la denunciante de víctima de violencia.

b. **Instalación del botón de pánico**: La Policía Nacional del Perú (PNP) debe instalar el aplicativo en el celular de la denunciante al presentar una denuncia. En caso de menores de edad, se instala en los dispositivos de los responsables legales (siempre que no sean los denunciados).

c. **Obligaciones de las instituciones:** La PNP debe coordinar con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) para la atención inmediata de las víctimas en Centros de Emergencia Mujer (CEM) o refugios temporales. Informar a las fiscalías y juzgados sobre la implementación y uso del aplicativo.

d. **Seguimiento y monitoreo**: Establecer el seguimiento del uso del Botón de Pánico, con especial énfasis en casos de riesgo severo. Incluir datos relacionados con el aplicativo en las fichas de valoración de riesgo.

e. **Medidas de protección**: Disponer la continuidad del uso del aplicativo hasta que finalice el proceso judicial o en etapas específicas según corresponda.

Según la exposición de motivos del **Proyecto de Ley 8763/2024-CR**, la principal razón para su propuesta es enfrentar la alta incidencia de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar en el Perú. La iniciativa destaca que las herramientas actuales, como las medidas de protección y alejamiento, no han sido suficientes para garantizar la seguridad de las víctimas. Ante ello, se plantea la implementación del Botón de Pánico como una medida tecnológica inmediata que permita a las víctimas alertar de manera rápida y eficiente a las autoridades ante situaciones de peligro, brindándoles una herramienta que fortalezca su protección y atención oportuna. Este mecanismo busca mejorar la capacidad de respuesta y la coordinación entre las instituciones involucradas en la protección de las víctimas, como la Policía Nacional del Perú, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y el Poder Judicial.

Respecto del *Costo-beneficio,* según el autor de la iniciativa legislativa, la propuesta no acarrea ningún gasto al erario nacional, por el contrario, coadyuva a proteger la vida y la integridad de la víctima de violencia sea el riesgo en el que se encuentre al momento de formular la denuncia policial, toda vez que, lo que principalmente se

busca es prevenir que el riesgo en el que se encuentre atente contra su vida. Respecto de su *Impacto normativo*, no se contrapone con ninguna norma y se alinea con el Acuerdo Nacional en materia de erradicación de la violencia, y solo busca actualizar la legislación, modificando diversos artículos de la Ley 30364.

2.6. Proyecto de Ley 9138/2024-CR

El **Proyecto de Ley 9138/2024-CR** propone la *Ley que modifica la Ley 30364 para prevenir la violencia económica contra la mujer y los integrantes del grupo familiar*, y tiene como objetivo prevenir y sancionar la violencia económica contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, específicamente en el contexto del incumplimiento de las obligaciones alimentarias. Se identifica en la iniciativa legislativa los siguientes puntos clave:

a. **Modificación del artículo 8**: Incorporar un nuevo numeral dentro del literal "d" sobre violencia económica o patrimonial, que estipula que los padres obligados al pago de pensión de alimentos serán considerados autores del delito de violencia económica si incumplen injustificadamente con tres meses consecutivos o cuatro intercalados de pensión alimenticia en un mismo año.

Según la exposición de motivos del **Proyecto de Ley 9138/2024-CR**, la principal razón para de la propuesta es abordar el incumplimiento de las obligaciones alimentarias como una forma de violencia económica que afecta directamente el desarrollo y bienestar de los menores alimentistas y de los progenitores responsables que asumen la tenencia de los hijos. La propuesta reconoce que la falta de pago de pensiones alimenticias no solo vulnera los derechos económicos de las víctimas, sino que también perpetúa desigualdades y genera graves consecuencias en la calidad de vida de los niños y adolescentes. En este contexto, el proyecto busca fortalecer los mecanismos de protección económica y garantizar la efectividad de las disposiciones legales, considerando que el incumplimiento injustificado de estas obligaciones constituye un acto de violencia económica que debe ser sancionado conforme a la Ley 30364, contribuyendo así a la prevención, sanción y erradicación de este tipo de violencia dentro del grupo familiar.

Respecto del *Costo-beneficio*, según el autor de la iniciativa legislativa, la propuesta no genera impacto presupuestal adverso para el Estado, sino que, por el contrario, contribuye a optimizar los recursos del sistema judicial y a garantizar una mayor protección de los derechos de los menores y sus progenitores responsables, ya que contribuirá a fortalecer la reducción de plazos de los abonos por concepto de alimentos. Respecto de su *Impacto normativo*, no se contrapone con ninguna norma y se alinea con el Acuerdo Nacional en materia de erradicación de la violencia, y solo busca actualizar la legislación, modificando diversos artículos de la Ley 30364.

III. MARCO NORMATIVO

El análisis de los proyectos de ley se sustenta en el siguiente marco normativo:

- **Constitución Política del Perú.**
- **Reglamento del Congreso de la República.**
- **Ley 29158,** Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
- **Ley 30364,** Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.
- **Decreto Legislativo 1428,** Decreto Legislativo que desarrolla medidas para la atención de casos de desaparición de personas en situación de vulnerabilidad.
- **Decreto de Urgencia 023-2020,** Decreto de Urgencia que crea mecanismos de prevención de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, desde el conocimiento de los antecedentes policiales.
- **Decreto Supremo 009-2016-MIMP,** Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.
- **Decreto Supremo 003-2019-IN,** Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo que desarrolla medidas para la atención de casos de desaparición de personas en situación de vulnerabilidad.
- **Decreto Supremo 003-2020-MIMP,** Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto de Urgencia que crea mecanismos de prevención de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, desde el conocimiento de los antecedentes policiales.
- **Resolución de la Fiscalía de la Nación 002420-2018-MP-FN,** Resolución que aprueba el Reglamento del Registro Único de Víctimas y Personas Agresoras.
- **Resolución Administrativa 000443-2022-CE-PJ,** Resolución del Poder Judicial mediante el cual aprobó la Directiva 024-2022-CE-PJ "Disposiciones para la implementación del Servicio Judicial de Alerta: Botón de Pánico", versión 001.

IV. OPINIONES SOBRE LA INICIATIVA LEGISLATIVA

4.1. Opiniones solicitadas

En cuanto al **Proyecto de Ley 4753/2022-CR** se solicitó las siguientes opiniones:

FECHA	INSTITUCIÓN	DOCUMENTO	RESPUESTAS
26.ABR.2023 17.MAY.2023	Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables	Oficio 526-2022-2023-CMF/CR Oficio 633-2022-2023-CMF/CR	SÍ
18.ABR.2024	Ministerio del Interior	Oficio 914-2023-2024-CMF/CR	NO
26.ABR.2023	Poder Judicial	Oficio 527-2022-2023-CMF/CR Oficio 635-2022-2023-CMF/CR	NO

17.MAY.2023			
26.ABR.2023 17.MAY.2023	Ministerio Público – Fiscalía de la Nación	Oficio 529-2022-2023-CMF/CR Oficio 529-2022-2023-CMF/CR	NO
26.ABR.2023 17.MAY.2023	Defensoría del Pueblo	Oficio 525-2022-2023-CMF/CR Oficio 632-2022-2023-CMF/CR	SÍ
26.ABR.2023 17.MAY.2023	Policía Nacional del Perú	Oficio 528-2022-2023-CMF/CR Oficio 636-2022-2023-CMF/CR	NO
18.ABR.2024	Asociación de Municipalidades del Perú	Oficio 917-2023-2024-CMF/CR	NO

En cuanto al **Proyecto de Ley 7429/2023-CR** se solicitó las siguientes opiniones:

FECHA	INSTITUCIÓN	DOCUMENTO	RESPUESTAS
08.ABR.2024	Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables	Oficio 853-2023-2024-CMF/CR	SÍ
08.ABR.2024	Ministerio de Justicia	Oficio 855-2023-2024-CMF/CR	NO
08.ABR.2024	Poder Judicial	Oficio 854-2023-2024-CMF/CR	NO

En cuanto al **Proyecto de Ley 7689/2023-CR** se solicitó las siguientes opiniones:

FECHA	INSTITUCIÓN	DOCUMENTO	RESPUESTAS
03.MAY.2024	Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables	Oficio 955-2023-2024-CMF/CR	SÍ
03.MAY.2024	Ministerio de Justicia	Oficio 957-2023-2024-CMF/CR	NO
03.MAY.2024	Ministerio del Interior	Oficio 956-2023-2024-CMF/CR	NO
03.MAY.2024	Ministerio Público – Fiscalía de la Nación	Oficio 958-2023-2024-CMF/CR	SÍ
03.MAY.2024	Poder Judicial	Oficio 954-2023-2024-CMF/CR	NO

En cuanto al **Proyecto de Ley 8350/2023-CR** se solicitó las siguientes opiniones:

FECHA	INSTITUCIÓN	DOCUMENTO	RESPUESTAS
12.JUL.2024	Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables	Oficio 1151-2023-2024-CMF/CR	SÍ
12.JUL.2024	Ministerio de Justicia	Oficio 1153-2023-2024-CMF/CR	NO
12.JUL.2024	Ministerio Público – Fiscalía de la Nación	Oficio 1154-2023-2024-CMF/CR	SÍ
12.JUL.2024	Poder Judicial	Oficio 1152-2023-2024-CMF/CR	NO
22.JUL.2024	Hiperderecho	Carta de fecha 22 de julio de 2024	SÍ

En cuanto al **Proyecto de Ley 8763/2024-CR** se solicitó las siguientes opiniones:

FECHA	INSTITUCIÓN	DOCUMENTO	RESPUESTAS
04.SET.2024	Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables	Oficio 0089-2024-2025-CMF/CR	**SÍ**
04.SET.2024	Ministerio de Transportes y Comunicaciones	Oficio 0091-2024-2025-CMF/CR	NO
04.SET.2024	Ministerio del Interior	Oficio 0090-2024-2025-CMF/CR	**SÍ**
04.SET.2024	Poder Judicial	Oficio 0088-2024-2025-CMF/CR	NO
04.SET.2024	Ministerio Público – Fiscalía de la Nación	Oficio 0093-2024-2025-CMF/CR	**SÍ**
04.SET.2024	Contraloría General de la República	Oficio 0092-2024-2025-CMF/CR	NO
04.SET.2024	Defensoría del Pueblo	Oficio 0094-2024-2025-CMF/CR	NO

En cuanto al **Proyecto de Ley 9136/2024-CR** se solicitó las siguientes opiniones:

FECHA	INSTITUCIÓN	DOCUMENTO	RESPUESTAS
11.OCT.2024	Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables	Oficio 0312-2024-2025-CMF/CR	NO
11.OCT.2024	Ministerio de Justicia	Oficio 0313-2024-2025-CMF/CR	NO
11.OCT.2024	Poder Judicial	Oficio 0311-2024-2025-CMF/CR	NO
11.OCT.2024	Ministerio Público – Fiscalía de la Nación	Oficio 0314-2024-2025-CMF/CR	**SÍ**

4.2. Opiniones recibidas

Se recibieron y consideraron las siguientes opiniones de las entidades e instituciones especializadas:

4.2.1. **Proyecto de Ley 4753/2022-CR**:

Respecto del **Proyecto de Ley 4753/2022-CR** se recibieron las siguientes opiniones:

DEL MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, mediante Oficio N° D001565-2023-MIMP-SG[16], de fecha 11 de agosto de 2023, suscrito por su entonces secretario general, el señor **José Ernesto Montalva de Falla**, adjunta el Informe N° D000706-2023-MIMP-OGAJ, elaborado por la Oficina General de Asesoría Jurídica del

[16] https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTI0OTkx/pdf

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, manifestando su opinión **DESFAVORABLE (NO VIABLE)**, con las siguientes consideraciones y conclusión:

> *"No se justifica de qué forma el publicar dicho registro, contribuirá a la protección y prevención de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, conforme lo indica su Exposición de Motivos, puesto que solo se limita a citar normas y estadísticas sobre la materia. Tampoco se precisa ni se desarrolla el argumento de cómo se protegería y prevendría a la víctima al publicitar el registro.*
>
> *Asimismo, señala que de mantener la propuesta y, eventualmente, aprobarla y publicarla, **se estaría vulnerando el principio de presunción de inocencia como derecho y garantía constitucional** que se encuentra recogido en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por el Tribunal Constitucional (...).*
>
> *(...), conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, "el respeto y tutela de la presunción de inocencia, en consecuencia, es un elemento esencial para una debida defensa, inherente a toda persona sujeta a proceso, desde su tramitación hasta el momento en que una sentencia condenatoria establezca su culpabilidad o una absolutoria decrete su libertad".*
>
> *(...), el Tribunal Constitucional ha referido que: "(...) a **todo procesado se le considera inocente mientras no se pruebe su culpabilidad: vale decir, hasta que no se exhiba prueba en contrario**. Rige desde el momento en que se imputa a alguien la comisión de un delito, quedando el acusado en condición de sospechoso durante toda la tramitación del proceso, hasta que se expida la sentencia definitiva".*
>
> *(...), pese que la persona agresora estaría bajo investigación o procesada, (...) su identidad en el RUVA, (estaría) al alcance de la ciudadanía, por el hecho de contar con una medida de protección, que eventualmente, podría ser revocada; lo cual, **además de ser potencialmente estigmatizadora, vulnera derechos fundamentales a la presunción de inocencia, honor e intimidad; consecuentemente, no es viable una propuesta legislativa de ese tipo**.*
>
> *Finalmente, (...), según las Directrices para los actores judiciales sobre privacidad y protección de datos, "tanto el derecho a la protección de datos como la libertad de expresión han ido evolucionando con la innovación tecnológica. Por lo tanto, la ponderación de estos derechos debe tener en cuenta el impacto tecnológico sobre ellos –en términos de riesgos y daños–, y también su eventual repercusión en el uso de estas tecnologías, ya que la posibilidad de ejercer estos derechos viene dada a menudo por las propias características tecnológicas"; consecuentemente, (...) **toda***

publicación de datos personales de alcance masivo, debe ser analizado a la luz de la protección de los derechos fundamentales, en forma ponderada.
[...]

III. CONCLUSIÓN
Por el presente, se emite opinión considerando ***NO VIABLE*** *el Proyecto de Ley N° 4753/2022-CR "Ley que facilita el acceso público y sin restricciones a la información de los registros únicos de víctimas y agresores (RUVA)", en concordancia con lo señalado en el numeral 2.2 del presente informe.*
[Resaltado y subrayado es nuestro]

DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO

La Defensoría del Pueblo, a través de la primera adjunta (e), señora **Alicia Abanto Cabanilla**, mediante Oficio 0277-2023-DP/PAD[17], de fecha 30 de mayo de 2023, emite opinión **DESFAVORABLE (ni viable, ni razonable)**, con las siguientes consideraciones:

"La propuesta plantea que cualquier persona interesada, no solo operadores de justicia, tengan acceso al RUVA, a fin de poder conocer quiénes son las víctimas y agresores en casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Este proyecto se justifica en que el acceso público y sin restricciones al RUVA contribuirá en la lucha contra la violencia como política del Estado.

En este contexto, es importante precisar que el artículo 115 del Reglamento de la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, indica que ***la información consignada en esta base de datos es reservada y solo las instituciones públicas vinculadas al proceso tienen acceso****. Asimismo, el Reglamento del Registro Único de Víctimas y Personas Agresoras establece como principio la confidencialidad y reserva de información, motivo por el cual dispone que se apliquen medidas de seguridad necesarias para proteger la información, pues* ***la difusión masiva de estos datos podría ocasionar una vulneración de derechos fundamentales y, en concreto, del derecho a la intimidad y protección de datos personales****, especialmente de las víctimas.*

Cabe asimismo tener en cuenta que, a la fecha, se encuentra vigente el Decreto de Urgencia 023-2020, que crea mecanismos de prevención de violencia contra las

[17] https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTA1MjM3/pdf

mujeres e integrantes del grupo familiar, desde el conocimiento de los antecedentes policiales y su reglamento. Esta norma ***establece un mecanismo adicional de prevención de la violencia, mediante la entrega gratuita de información sobre los antecedentes policiales de sus parejas, a las personas que consideran que se podría producir sobre ellas o las personas cercanas, un daño a su integridad física, psicológica y/o emocional****. Esta medida responde a la grave situación de violencia que enfrentan las mujeres, adolescentes y niñas en el Perú y a la imperiosa necesidad de que ellas cuenten con información relevante, que les permita prevenir situaciones de riesgo futuro, tanto para sus vidas como para las de su entorno familiar.*

Queda en evidencia que ***nuestro sistema jurídico ya cuenta con normativa que garantiza el acceso a la información de los antecedentes policiales de posibles personas agresoras****, y no solo lo pueden solicitar sus parejas si son potenciales víctimas de violencia, sino también familiares hasta de tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad, que tengan sospechas de que la pareja de su familiar es una persona peligrosa para ella, o sus hijas/hijos, e incluso pueden solicitarlo otras personas cercanas a la potencial víctima de violencia.*

La situación se puede incluso agravar si tenemos en consideración que el acceso público de la información consignada en esta base de datos, respecto de las víctimas, podría someterlas a una situación de mayor vulnerabilidad y posible revictimización. Por otro lado, se debe considerar que, en el caso de los agresores, ***la publicidad de esta información ocasionaría la vulneración del derecho fundamental a la intimidad****. Asimismo, se debe prevenir la posible estigmatización a quienes cuenten con antecedentes de violencia y se estén resocializando.*

En virtud de lo expuesto y al amparo de lo establecido por el artículo 162° de la Constitución Política y el artículo 26° de la Ley n.° 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, consideramos que, ***si bien la finalidad de la propuesta legislativa es importante, la medida que establece no resulta viable ni razonable****, en tanto existen diversos mecanismos para la protección de las víctimas e, inclusive, una medida menos gravosa que permite a las víctimas acceder a los antecedentes policiales de sus agresores de manera gratuita.*
[Resaltado y subrayado es nuestro]

4.2.2. **Proyecto de Ley 7429/2023-CR**:

Respecto del **Proyecto de Ley 7429/2023-CR** se recibieron las siguientes opiniones:

DEL MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, mediante Oficio N° D000835-2024-MIMP-SG[18], de fecha 24 de mayo de 2024, suscrito por su secretaria general, la señora **Tabata Dulce Vivanco del Castillo**, adjunta el Informe N° D000014-2024-MIMP-DVMM-SEAJ, elaborado por el Despacho Viceministerial de la Mujer del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, manifestando su opinión **DESFAVORABLE (NO VIABLE)**, con las siguientes consideraciones y conclusión:

> *"[...] el objeto de la Ley 30364 es prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia producida en el ámbito público o privado **contra las mujeres por su condición de tales, y contra los integrantes del grupo familiar**. Por otro lado, la violencia contra los integrantes del grupo familiar es definida como cualquier acción o conducta que le causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico y que se produce en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder, de parte de un integrante a otro del grupo familiar.*
>
> *Esta relación de responsabilidad, confianza o poder se da en contextos donde se interrelacionan los i) cónyuges, excónyuges, convivientes, exconvivientes; padrastros, madrastras; o quienes tengan hijas o hijos en común; ii) las y los ascendientes o descendientes por consanguinidad, adopción o por afinidad; iii) parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad o adopción y segundo grado de afinidad; y iv) quienes habiten en el mismo hogar siempre que no medien relaciones contractuales o laborales, al momento de producirse la violencia, conforme se recoge actualmente en la Ley N° 30364. Debe recordarse también que esta disposición fue modificada con el fin de estar acorde con las disposiciones normativas del Código Civil referido al Derecho de Familia, vale decir, se identificó de manera más específica el otorgar protección de todos los integrantes que constituyen el Grupo Familiar conforme a los artículos 236, 237 y 238 del Código Civil.*
>
> *Asimismo, también es preciso señalar que **el término Grupo Familiar que recogió la norma señaló que esta abarca el reconocimiento de tres dimensiones que están en intersección: la protección familiar en sentido extenso; la protección de los miembros del hogar, que es la unidad doméstica; y la última parte está referida a la protección de las relaciones de pareja**, recogiendo para tal efecto la mención del parentesco conforme al Código Civil.*

[18] https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTg5NTk0/pdf

En ese sentido, si bien el proyecto menciona expresamente a novios, esponsales y personas que tengan vínculo amoroso-afectivo que este comprobado, su fundamentación radica en una relación de pareja donde el sentimiento afectivo es el que las caracteriza y en ellas se pueden producir relaciones de poder que se caracterizadas por la asimetría, el dominio y el control de una persona sobre otra, por ende, pueden ser consideradas miembros del grupo familiar.

En línea con lo anterior, son miembros del grupo familiar, que viven en el hogar, quienes sin tener cualquiera de las condiciones señaladas en el numeral b) del artículo 7 de la Ley, habitan en el mismo hogar, siempre que no medien relaciones contractuales o laborales, por ende, son sujetos de protección de la Ley.

Por otro lado, el proyecto de ley hace énfasis a personas que no vivan juntos, pero tienen un vínculo amoroso y entre las cuales se pueden producir actos de violencia, sin considerar que esta situación es parte contexto ya considerado por la Ley en ***la definición de violencia contra las mujeres: "acción o omisión que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de mujeres que se puede manifestar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal", por lo que la relación de pareja que expone el proyecto, ya se contempla en la Ley****.*

Deber recordarse que la Ley busca prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia producida en el ámbito público o privado, contra las mujeres por su condición de tal, y contra los integrantes del grupo familiar, por lo que ***de tratarse de una víctima de violencia, mujer que se encuentra en una relación de pareja, en la que su agresor no viva con ella, ella ya es sujeto de protección de la Ley y por tanto, puede obtener medidas de protección a su favor, a fin de resguardar su integridad física, psíquica y sexual y goce pleno de sus derechos****.*

No menos importante es señalar que el proyecto alude al término novio y esponsales sin sustentar en su análisis data cuantitativa o cualitativa que refleje cuál es la problemática que se busca solucionar, puesto que no se justifica la necesidad de identificar a la persona víctima de violencia, bajo el marco de la Ley 30364, como "novio" o "esponsal" para de este modo reducir la violencia; más aún cuando actualmente estos términos han caído en desuso, no generando con su inclusión un trato diferente hacia las personas que son víctima de violencia, sea una mujer o sea un integrante del grupo familiar.

III. CONCLUSIÓN

Conforme al análisis efectuado en los párrafos 2.12 al 2.16 del presente informe, el Proyecto de Ley 7429/2023-CR, Ley que amplia los sujetos de protección en la Ley N° 30364, cuyo pedido de opinión técnica es solicitada por el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, señor Américo Gonza Castillo, al respecto ***se remite opinión no favorable por devenir en redundante con sujetos que ya se encuentran bajo la protección de la Ley 30364****.*
[Resaltado y subrayado es nuestro]

4.2.3. **Proyecto de Ley 7689/2023-CR:**

Respecto del **Proyecto de Ley 7689/2023-CR** se recibieron las siguientes opiniones:

DEL MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, mediante Oficio N° D000908-2024-MIMP-SG[19], de fecha 6 de junio de 2024, dirigido al presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, suscrito por su secretaria general, la señora **Tabata Dulce Vivanco del Castillo**, adjunta el Informe N° D000012-2024-MIMP-DATPS, elaborado por la Dirección de Asistencia Técnica y Promoción de Servicios del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, manifestando su opinión **DESFAVORABLE (NO VIABLE)**, con las siguientes consideraciones y conclusión:

> *"Al respecto, señalamos que con fecha 04 de abril de 2022, mediante Decreto Supremo N° 005-2022-MIMP,* ***se modificó el Reglamento de la Ley 30364, reconociendo a la desaparición por particulares****, como una modalidad de violencia de género que a menudo está vinculada con otras formas de violencia, como la violencia sexual, la trata o los feminicidios; modificación que resultó un avance importante para visibilizar esta problemática en la legislación nacional. Asimismo, se incorporó el numeral 6.3 al artículo 6 del Reglamento de la Ley, donde se señaló que "Las medidas adoptadas para la atención de casos de desaparición de mujeres, niñas, niños y adolescentes por particulares se regirán de acuerdo con lo dispuesto por la normativa vigente en la materia".*
>
> *Por otro lado, contamos con legislación específica sobre la materia, como el Decreto Legislativo N° 1428, Decreto Legislativo que desarrolla medidas para la atención de casos de desaparición de personas en situación de vulnerabilidad y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 003-2019-IN. El Decreto Legislativo señalado*

[19] https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTk0MTYx/pdf

*tiene como objeto "**desarrollar medidas para la atención de casos de desaparición de personas, así como de personas en situación de vulnerabilidad denunciadas como desaparecidas, abarcando la atención de denuncias, difusión, investigación, búsqueda, ubicación y empleo de mecanismos tecnológicos para la organización y difusión de información sobre casos de desaparición de personas**".*

Cabe precisar que esta norma, en su artículo 5, literal a), señala que "se considera persona desaparecida a aquella que se encuentra ausente de su domicilio habitual y respecto del cual se desconoce su paradero". A su vez, en el literal b) del mismo artículo, indica que las personas en situación de vulnerabilidad, son aquellas que "sufren discriminación o situaciones de desprotección, entre ellas: niñas, niños, adolescentes (...) mujeres víctimas de violencia (...) entre otras personas que se encuentran en esa situación"

*Por otro lado, sobre este extremo del Proyecto de Ley, la DPVLV, de la DGCVG, en su Informe Técnico N° D000070-2024-MIMP-DPVLV-MTGD, señala que, "el contenido que desarrolla para este nuevo tipo de violencia que afecta por igual a mujeres e integrantes del grupo familiar, bajo un literal e) del artículo 8, **no resulta coherente ni permite describir los actos que configuran la violencia por desaparición**. Sin perjuicio de ello, **asumiendo que lo que se quiere es recoger el reconocimiento expreso de la violencia por desaparición como una forma de violencia contra las mujeres, y se trata de desaparición por particulares, esta debe ser descrita como tal**. Para tal efecto, conviene citar que la desaparición de mujeres cometida por particulares es la privación de libertad de una mujer o niña, o un grupo de mujeres y/o niñas, cometida por uno o varios particulares en razón de su género, cuya finalidad (violencia sexual, trata de personas o feminicidio y tortura) no requiere ser probada como tal para que la desaparición por si sola califique como un acto de Violencia Contra las Mujeres. Siendo **la desaparición una forma de violencia contra las mujeres que nuestro ordenamiento jurídico actualmente ya lo recoge**".*

Asimismo, el informe de la DPVLV agrega que el reconocimiento de la desaparición por particulares como una modalidad de violencia, "se encuentra en sintonía con lo señalado en la Recomendación General N° 2 del Comité de Expertas del MESECVI sobre mujeres y niñas desaparecidas en el hemisferio de acuerdo a los Arts. 7b y 8 de la Convención de Belém do Pará".

*En ese sentido, coincidimos con lo señalado en el informe de la DPVLV, respecto a que **lo formulado ya se encuentra previsto en la legislación vigente que reconoce la desaparición por particulares como una modalidad de***

violencia, por lo que la finalidad que se pretende lograr con esta propuesta ya está contemplada en nuestra legislación y además se encuentra en concordancia con las obligaciones internacionales del Estado peruano *de "Adoptar todas las medidas necesarias para prevenir de manera general y especial la desaparición de las mujeres y niñas; investigar, sancionar y erradicar esta forma de violencia tanto cuando es cometida por particulares como forzadas".*

Respecto a la propuesta de modificación del artículo 15 de la Ley 30364, sustentándose en que ***exigir la "debida identificación" podría conllevar a una interpretación errónea del operador que recibe la denuncia, sentando así una barrera para presentar la misma****, señalamos que el artículo 16.1 del Reglamento de la Ley 30364, específicamente señala que "Las víctimas y las personas denunciantes deben identificarse ante la autoridad que recibe la denuncia, para lo cual pueden presentar su Documento Nacional de Identidad u otro análogo, ya sea en un formato físico o digital, e indicando su autoidentificación étnica y su lengua materna. En los casos en que la víctima o quien formule la denuncia no posea un documento de identidad, los operadores de justicia y la Policía Nacional del Perú proceden a recibir la denuncia de forma verbal, escrita o digital, en aplicación del principio de intervención inmediata y oportuna, y del enfoque intercultural, según corresponda. (...)". Es decir, la norma señala que,* ***si bien la persona que interpone la denuncia debe identificarse, el no poseer documento nacional de identidad u otro análogo (carnet de extranjería, pasaporte, licencia de conducir o carnet de solicitante de refugio, entre otros), no es impedimento para presentar la denuncia****.*

Sin embargo, coincidimos con lo señalado en el Informe de la DPVLV, cuando señala que la propuesta del proyecto de ley, al no formular mayores cambios en la redacción, podría generar una interpretación conforme a la cual la persona que denuncia deba portar consigo algún documento de identidad, afectando así el acceso a la justicia de las víctimas de violencia. Por lo tanto, este extremo de la propuesta no resultaría favorable.

Respecto a ***la propuesta de modificación del literal d) del artículo 16 de la Ley 30364, señalamos que la misma no ha considerado que la regulación del proceso especial ha sido modificada mediante la Ley N° 31715 del 21 de marzo de 2023****, unificando los plazos para la emisión de las medidas de protección a veinticuatro (24) horas, sin importar si el riesgo es leve, moderado o severo, entre otras medidas. Esta modificación también señala que el juez o jueza "evalúa el caso y resuelve, priorizando según el nivel de riesgo, en audiencia la emisión de las medidas de protección y/o cautelares requeridas, que sean acordes con la necesidad*

de la víctima, salvo en el supuesto de riesgo severo, donde el juez puede prescindir de la audiencia".

En ese sentido, el informe de la DPVLV presenta el siguiente cuadro comparativo, que recoge los cambios al artículo 16 de la Ley 30364, realizados por la Ley 31715:

Nivel de riesgo	*Plazo para realizar la audiencia y dictar medidas de protección (Art. 16 de la Ley 30364, **previa modificación por Ley** 31715)*	*Plazo para realizar la audiencia y dictar medidas de protección (Art. 16 de la Ley 30364, **modificado por Ley** 31715)*
Leve	*Máximo 48 horas*	*Máximo 24 horas*
Moderado	*Máximo 48 horas*	*Máximo 24 horas*
Severo	*Máximo 24 horas*	*Máximo 24 horas*
Indeterminado	*Máximo 72 horas*	*Máximo 48 horas*

Por lo expuesto, coincidimos con lo señalado en el informe de la DPVLV, cuando indica que la propuesta formulada no ha efectuado un análisis integral de los cambios al artículo 16 de la Ley 30364 y, por lo tanto, no resulta coherente con la finalidad que pretende conseguir, que sería priorizar los casos según el nivel de riesgo para el dictado de las medidas de protección.

*Con relación a la modificación del numeral 10) del artículo 22 de la Ley 30364, que propone extender, como medida de protección, el tratamiento psicológico para la recuperación emocional de los familiares hasta el segundo grado de consanguinidad, en caso de violencia por desaparición, señalamos que si bien es importante un acompañamiento y tratamiento psicológico a los familiares de las víctimas de violencia por desaparición, en la medida que el desconocimiento del paradero de su familiar trae como consecuencia sufrimiento inevitable, que es continuo o permanente hasta en tanto no sea posible establecer el destino o paradero de la víctima ni se identifiquen a los posibles responsables, **ello no sería una medida de protección propiamente dicha**.*

Se entiende que las medidas de protección son aquellas medidas dictadas por el juez o jueza que resultan eficaces en caso de que la vida, integridad o libertad personal sean amenazadas o se encuentren en riesgo. De acuerdo al artículo 22 de la Ley 30364, "el objeto de las medidas de protección es neutralizar o minimizar los efectos nocivos de la violencia ejercida por la persona denunciada, y permitir a la víctima el normal desarrollo de sus actividades cotidianas; con la finalidad de asegurar su integridad física, psicológica y sexual, o la de su familia, y resguardar sus bienes patrimoniales (...)", por lo tanto, se observa este extremo de la propuesta.
[...].

III. CONCLUSIÓN

Conforme al análisis desarrollado sobre el del Proyecto de Ley N° 7689/2023-CR, que propone la "Ley que modifica la Ley 30364, Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar; reconociendo la desaparición como un tipo de violencia"; reconociendo la desaparición como un tipo de violencia", se brinda opinión técnica consolidada señalando que este ***no resulta favorable****, conforme a las consideraciones establecidas en los numerales 2.8 al 2.20 del presente informe técnico*

[Resaltado y subrayado es nuestro]

DEL MINISTERIO PÚBLICO – FISCALÍA DE LA NACIÓN

El Ministerio Público – Fiscalía de la Nación, mediante Oficio N° 002483-2024-MP-FN-SEGFIN[20], de fecha 27 de mayo de 2024, dirigido al presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, suscrito por su secretario general, el señor **Miguel Alan Puente Harada**, adjunta el Informe N° 000011-2024-MP-FN-CNFEVCMYGF, elaborado por la Coordinación Nacional de las Fiscalías Provinciales Corporativas Especializadas en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, manifestando su opinión **FAVORABLE**, con las siguientes consideraciones y conclusión:

> *"Al respecto, el Estado Peruano al amparo de las recomendaciones brindadas por el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará en su Recomendación General N° 2,* ***modificó los artículos 6° y 8° del Reglamento de la Ley N°303641; reconociendo la "desaparición por particulares" como una modalidad de violencia****.*
>
> *Bajo esta perspectiva, podemos decir que,* ***la desaparición perpetrada por particulares constituye una violación de derechos humanos****; reconociendo que las víctimas potenciales de desapariciones se concentran principalmente en el sector de la población que se encuentra en situación de especial vulnerabilidad, como es el caso de las mujeres (niñas, adolescentes y adultas).*
>
> *La violencia por desaparición ocasionada por otra persona particular, es un fenómeno social que se caracteriza por la privación de libertad de una persona, seguida de la ocultación de su destino y paradero, lo que genera un profundo sufrimiento y angustia en sus seres queridos.*

---

[20] https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTg5NzEw/pdf

*Es por ello, que cuando una mujer y/o integrante del grupo familiar desaparece, **las autoridades deben presumir que está secuestrado/a o privado/a de su libertad por un particular y sigue con vida hasta que se ponga fin a la incertidumbre de la suerte que ha corrido**. Por ello, la desaparición cometida por particulares no requiere ser probada como tal, para que califique como un acto de violencia; lo que conlleva la responsabilidad internacional del Estado en el marco de sus obligaciones, de adoptar políticas, medidas jurídicas y legislativas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar cualquier forma de violencia de género, lo que incluye las desapariciones cometidas por particulares; conforme lo prescrito en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Belém do Pará), Declaración y la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995).*

*En mérito a ello, ante la desaparición de mujeres y/o integrantes del grupo familiar, las obligaciones del Estado se dan en dos momentos: antes de la desaparición y después de la denuncia ante la autoridad competente. En el primer momento preexiste el deber general de prevenir cualquier forma de violencia contra la mujer y/o integrante del grupo familiar. En el segundo momento, cuando **el Estado ha tomado conocimiento de la desaparición mediante la denuncia, realiza acciones de búsqueda e investigación para ubicar a la persona reportada como desaparecida, actuando bajo los parámetros de la debida diligencia reforzada**. Por lo antes expuesto, esta Coordinación Nacional considera que la propuesta de modificar la Ley N° 30364, "Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar", **reconociendo la desaparición como un tipo de violencia, resultaría viable**, debido a que esta forma de violencia no solo vulnera los derechos fundamentales de la persona desaparecida, sino que también causa un daño emocional y psicológico devastador en sus familiares, quienes enfrentan la incertidumbre y la impotencia ante la falta de información sobre el paradero de sus seres queridos.*

III. CONCLUSIÓN

***La propuesta legislativa del Proyecto de Ley N° 7689/2023-CR es viable**, conforme previamente se ha fundamentado.*

*En virtud de lo analizado, podemos considerar como "persona desaparecida", cuando una persona no se encuentre en su domicilio por un determinado periodo de tiempo, y además que no se tengan noticias de su paradero; **concordante con lo prescrito en el Decreto Legislativo N° 1428**.*

En este sentido, en los casos de desaparición por particulares, es indispensable una intervención diligente desde el reporte de desaparición, lo que ayudará a que sean ubicadas con inmediatez, evitando que sean víctimas de otras formas de violencia. Asimismo, la intervención de las autoridades en estos casos debe darse bajo la presunción de que la persona reportada como desaparecida está privada de su libertad y continúa con vida, hasta el momento en que se esclarezca la situación.
[Resaltado y subrayado es nuestro]

4.2.4. **Proyecto de Ley 8350/2023-CR**:

Respecto del **Proyecto de Ley 8350/2023-CR** se recibieron las siguientes opiniones:

DEL MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, mediante Oficio N° D001647-2024-MIMP-SG[21], de fecha 27 de setiembre de 2024, suscrito por su secretaria general, la señora **Tabata Dulce Vivanco del Castillo**, adjunta el Informe N° D000525- 2024-MIMP-OGAJ, elaborado por la Oficina General de Asesoría Jurídica y el Informe D000087- 2024-MIMP-DPVLV, elaborado por la Dirección de Políticas para una vida Libre de Violencia del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, manifestando su opinión **DESFAVORABLE (NO VIABLE)**, con las siguientes consideraciones y conclusión:

"Sobre el artículo 2
[...] actualmente los tipos de violencia de la Ley N° 30364, son: a) Violencia física, b) Violencia psicológica, c) Violencia sexual y d) Violencia económica o patrimonial.

*Es decir, **la tipología de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar (IGF), está relacionada al ámbito de afectación que genera sobre las víctimas**; así, una afectación a la integridad corporal o la salud, será violencia física, una acción que genera humillación o estigmatización será violencia psicológica, una acción de naturaleza sexual sin consentimiento de la persona, será violencia sexual, y una acción u omisión sobre el menoscabo de los recursos económicos o patrimoniales, corresponderá a violencia económica o patrimonial.*

En complemento, el reglamento de la Ley N° 30364, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-20196-MIMP, desarrolla las modalidades de violencia, las cuales incluyen: aquellas que se manifiestan a través de violencia en relación de pareja, feminicidio, trata de personas con fines de explotación sexual, explotación sexual de

[21] https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MjE5Mzk0/pdf

niñas, niños y adolescentes, acoso sexual, violencia en los servicios de salud sexual y reproductiva, esterilizaciones forzadas, hostigamiento sexual, acoso político, violencia en conflictos sociales, violencia en conflicto armado, violencia a través de las tecnologías de la información y comunicación, violencia por orientación sexual, violencia contra mujeres indígenas u originarias, violencia contra mujeres afroperuanas, violencia contra mujeres migrantes, violencia contra mujeres con virus de inmunodeficiencia humana, violencia en mujeres privadas de libertad, violencia contra las mujeres con discapacidad, acoso a través del proceso judicial, desaparición por particulares, entre otras.

Ahora bien, conviene traer a colación que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), a través de Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeresy los Integrantes del Grupo Familiar, ha definido al ***ciberacoso, acoso virtual o acoso cibernético, como la "acción o conducta realizada por una persona o grupo de personas para amenazar, avergonzar, intimidar o criticar, con o sin connotación sexual, a través de medios de comunicación digital a una persona, quien rechaza estas acciones por considerar que afectan o vulneran su derecho a la dignidad, a la integridad, a la salud o el derecho a una vida libre de violencia****".*

Además, el ciberacoso puede manifestarse de diversas formas:

- ***Ciberbullying:*** *Consiste en el acto o actos en el que una persona menor de edad atormenta, amenaza, hostiga, humilla o molesta a otra persona menor de edad mediante internet, teléfonos móviles, consolas de juegos u otras tecnologías telemáticas.*
- ***Grooming:*** *Consiste en las prácticas realizadas de personas adultas para ganarse la confianza de una persona menor de edad fingiendo empatía, cariño, etc. con fines de satisfacción sexual (como mínimo, y casi siempre, obtener imágenes del/a menor desnudo/a o realizando actos sexuales), a través de internet.*
- ***Extorsión sexual:*** *Extorsión sexual o chantaje de una persona hacia otra con imágenes, audios, mensajes o videos de connotación sexual, que generalmente ha sido compartido mediante sexting (envío de mensajes, imágenes y videos de contenido erótico o pornográfico mediante dispositivos móviles).*
- ***Suplantación:*** *Él o la acosador/a se hace pasar por la víctima, usando la contraseña de acceso de sus cuentas online y envía mensajes agresivos u ofensivos a terceras personas.*
- ***Happy slapping:*** *Publicación en la red de alguna agresión física grabada con algún medio digital.*

- ***Stalking:*** *Persecución obsesiva a la persona con la que se pretende establecer un contacto personal contra su voluntad. En muchos casos el acosador o acosadora, intenta retomar una relación sentimental que ha tenido con la víctima.*
- ***Ciberpersecución:*** *Envío frecuente de comunicaciones electrónicas hostigadoras y amenazantes.*
- ***Insultos electrónicos:*** *Ofensas con o sin connotación sexual.*
- ***Ciberamenaza:*** *Intimidación, hostigamiento, humillación, amenazas o molestias a través de mensajes de textos en chat, llamadas o correo electrónico.*
- ***Hostigamiento:*** *Envío reiterado de mensajes ofensivos, con o sin connotación sexual, a través de correo electrónico, chat, mensajes de texto, WhatsApp, Facebook, entre otros.*

Como puede apreciarse, el ciberacoso puede manifestarse de diversas formas, y estas pueden estar vinculadas a diversos tipos de violencia. Por ejemplo, el grooming, la extorsión sexual y el hostigamiento, pueden estar vinculados a la violencia sexual, en cambio, el ciberbullying, la suplantación, el Happy slapping, el Stalking, la Ciberpersecución y la Ciberamenaza, pueden relacionarse a la violencia psicológica. En tanto, los insultos electrónicos pueden ser violencia sexual como psicológica.

En esa línea, el ciberacoso no podría constituirse como un "tipo de violencia", sino como una "modalidad de violencia", al ser una forma en que se manifiesta la misma.

Dicho esto, es pertinente traer a colación que, conforme lo establece el artículo 8 del reglamento de la Ley N° 30364, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2016-MIMP, una de las modalidades de violencia es la realizada a través de las tecnologías de la información o comunicación (TIC).

En esa línea, el ciberacoso, conforme lo propone el proyecto normativo, se refiere a los "actos de acoso o intimidación, cometidos, asistidos o agravados por el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones"; por tanto, ***la inclusión del ciberacoso no sería necesaria, pues ya se encuentra dentro de la modalidad de violenciaa través de las TIC. En atención a lo descrito, este extremo de la propuesta normativa no resulta viable****.*

No obstante, se considera pertinente recordar que, conforme lo establece el Decreto Legislativo N° 1412, Ley de Gobierno Digital, las "Tecnologías Digitales" "Se refieren a las Tecnologías de la Información y la Comunicación – TIC, incluidos Internet, las tecnologías y dispositivos móviles, así como la analítica de datos

utilizados para mejorar la generación, recopilación, intercambio, agregación, combinación, análisis, acceso, búsqueda y presentación de contenido digital, incluido el desarrollo de servicios y aplicaciones aplicables a la materia de gobierno digital" (Art. 3, numeral 1).

En esa línea, desde este Sector se analizará la posibilidad de ampliar o complementar el término de la modalidad de violencia a través de tecnologías de la información o comunicación, a violencia a través de tecnologías digitales.

Sobre el artículo 3
[...]
*Sobre lo señalado, es oportuno recordar que, en adición a la definición sobre acoso virtual del MIMP, para el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés), el ciberacoso "**es acoso o intimidación por medio de las tecnologías digitales. Puede ocurrir en las redes sociales, las plataformas de mensajería, las plataformas de juegos y los teléfonos móviles. Es un comportamiento que se repite y que busca atemorizar, enfadar o humillar a otras personas**".*

En concordancia, la Relatora Especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, la señalado que las tecnologías de la información y comunicación "pueden utilizarse directamente como medios para hacer amenazas digitales e incitar a la violencia de género, así como amenazas de violencia física y/o sexual, violación, asesinato, comunicaciones en línea no deseadas y que constituyen acoso, o incluso alentar a otros a infligir daños físicos a mujeres".

En esa línea, agrega la Relatora, que "[l]a violencia en línea contra la mujer puede manifestarse en diversas formas y por diferentes medios, como el acceso, la utilización, la manipulación, la difusión o el intercambio de datos, información y/o contenidos, fotografías o vídeos privados no consentidos, incluidas imágenes sexualizadas, audioclips y/o vídeoclips o imágenes editadas con Photoshop".

Por tal motivo, ha recomendado a los Estados a prohibir con claridad y tipificar como delito la violencia en línea contra la mujer, en específico la distribución no consentida de imágenes íntimas, el acoso y el hostigamiento criminal en internet. Asimismo, ha señalado que la penalización de la violencia en línea debe abarcar todos los elementos de este tipo de abusos.

En virtud de lo expuesto, no cabe duda que resulta de vital importancia sancionar todo acto de violencia en línea contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

***No obstante, vale traer a colación que el Código Penal ya contempla el tipo penal de "Acoso" en el artículo 151-A**, en los siguientes términos:*
Artículo 151-A.- Acoso
El que, de forma reiterada, continua o habitual, y por cualquier medio, vigila, persigue, hostiga, asedia o busca establecer contacto o cercanía con una persona sin su consentimiento, de modo que pueda alterar el normal desarrollo de su vida cotidiana, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años, inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos 10 y 11 del artículo 36, y con sesenta a ciento ochenta días-multa.

La misma pena se aplica al que, por cualquier medio, vigila, persigue, hostiga, asedia o busca establecer contacto o cercanía con una persona sin su consentimiento, de modo que altere el normal desarrollo de su vida cotidiana, aun cuando la conducta no hubiera sido reiterada, continua o habitual.

Igual pena se aplica a quien realiza las mismas conductas valiéndose del uso de cualquier tecnología de la información o de la comunicación.

La pena privativa de la libertad será no menor de cuatro ni mayor de siete años, inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos 10 y 11 del artículo 36, y de doscientos ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa, si concurre alguna de las circunstancias agravantes:
1. La víctima es menor de edad, es persona adulta mayor, se encuentra en estado de gestación o es persona con discapacidad.
2. La víctima y el agente tienen o han tenido una relación de pareja, son o han sido convivientes o cónyuges, tienen vínculo parental consanguíneo o por afinidad.
3. La víctima habita en el mismo domicilio que el agente o comparten espacios comunes de una misma propiedad.
4. La víctima se encuentre en condición de dependencia o subordinación con respecto al agente.
5. La conducta se lleva a cabo en el marco de una relación laboral, educativa o formativa de la víctima."

En principio, podría decirse que, conforme al primer párrafo del tipo penal, la acción de vigilar, perseguir, hostigar, asediar o buscar establecer contacto o cercanía con una persona sin su consentimiento, puede realizarse "por cualquier medio", lo que implica que se ejecute, entre otras, mediante el uso de tecnologías de la información o comunicación. Bajo esa lógica, podría indicarse que no resulta necesario otro tipo penal.

No obstante, tomando en cuenta que, según lo señalado por UNICEF, el ciberacoso es perpetrado por medio de las tecnologías digitales, lo cual constituiría un elemento del tipo penal, ***podría analizarse incluir esta modalidad de acoso, en la Ley N° 30096, Ley de Delitos Informáticos, tomando como base el artículo 151-A del Código Penal y adecuándolo al uso de estas tecnologías****.*

Asimismo, conviene destacar que, mediante el Decreto Legislativo N° 1625, impulsado por el MIMP, se ha modificado los artículos 154-B y 158 del Código Penal e incorporado el artículo 5-A en la Ley N° 30096, Ley de Delitos Informáticos. Sobre la inclusión del delito de Chantaje Sexual con materiales elaborados o modificados por medios digitales o tecnológicos, esta tipificación estará regulando una de las manifestaciones de ciberacoso relacionada a la ciber amenaza.

Así las cosas, el artículo 3 de la propuesta normativa, no resulta viable en los términos redactados.

III. CONCLUSIÓN

Conforme al análisis efectuado en el presente informe sobre el Proyecto de Ley N° 8350/2024-CR, Proyecto de Ley que incorpora como tipo de violencia el ciberacoso, se brinda opinión técnica, en el marco de nuestras competencias, señalando que el mismo ***no resulta favorable****.*

[Resaltado y subrayado es nuestro]

DEL MINISTERIO PÚBLICO – FISCALÍA DE LA NACIÓN

El Ministerio Público – Fiscalía de la Nación, mediante Oficio N° 004731-2024-MP-FN-SEGFIN[22], de fecha 9 de octubre de 2024, suscrito por su secretario general, el señor **Miguel Alan Puente Harada**, adjunta el Informe N° 000027-2024-MP-FN-CNFEVCMYGF, elaborado por la Coordinación Nacional de las Fiscalías Provinciales Corporativas Especializadas en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, manifestando su opinión como **PARCIALMENTE VIABLE**, con las siguientes consideraciones y conclusión:

"Al respecto, ***la ciberviolencia o violencia digital*** *es abordada por el Estado Peruano en el Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021, que reconoce el uso de las tecnologías de la información como una de las modalidades para ejercer las violencias.*

[22] https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MjIyMTk1/pdf

Esta forma de violencia que se observa en los espacios digitales, es una extensión de la desigualdad y la discriminación que han existido y existen en todos los aspectos de la vida de la víctima de violencia; causando graves daños a las propias víctimas y la comunidad digital, al mermar la vigencia de los derechos humanos en internet y la posibilidad de contar con un ciberespacio libre, seguro y equitativo que pueda redundar en beneficios para todas.

*En esa línea, es importante mencionar que en el artículo 8° del Reglamento de la Ley N°303649, "Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar", se hace mención a la "violencia a través de las tecnologías de la información y comunicación", **como una modalidad de violencia; abriendo la posibilidad a que esta pueda ser considerada como un tipo de violencia, siguiendo el proceso de tutela especial**.*

Concordante con lo señalado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: "la violencia en línea contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar debe abordarse en el contexto más amplio de la discriminación y la violencia fuera de línea, y que los Estados debían promulgar medidas legislativas adecuadas para asegurar las debidas respuestas para hacer frente a este fenómeno".

En tal sentido, tenemos que el ciberacoso tiene múltiples dimensiones. No sólo consiste en perseguir, hostigar, asediar, amenazar o intimidar a una persona, a través del uso de tecnologías de la información o comunicación, para obtener de ella una conducta o acto de connotación sexual, sino también difunde, expone, reproduce, transmite, comercializa, oferta, intercambia o comparte imágenes, audios, videos reales o simulados de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento, a través de medios tecnológicos, como correo electrónico, mensajes telefónicos, redes sociales y plataformas de internet, que por su naturaleza atentan contra la integridad, la dignidad y la vida privada de las personas (fundamentalmente mujeres) causando daño psicológico, económico o sexual, tanto en el ámbito privado como en el público, además de daño moral, tanto a ellas como a sus familias.

El ciberacoso puede ser grupal (a lo que se ha llamado raiding), cuando dos o más personas se organizan y coordinan para acosar en línea, de forma repetida a una persona, muchas veces de manera sostenida a lo largo del tiempo y con una estrategia. Estos grupos pueden estar formados por miembros de comunidades, foros o alianzas digitales, donde se han encontrado ciertos tipos de masculinidades particularmente violentas. También puede realizarse a través de bots y/o cuentas

falsas (llamadas marionetas o sockpuppets) que buscan pasar como usuarios reales para difundir información sesgada, desinformar o atacar.

Bajo esta perspectiva, esta Coordinación Nacional considera que, la propuesta de modificar el artículo 8° de la Ley N° 30364, reconociendo el ciberacoso como un tipo de violencia, resultaría parcialmente viable; conforme a lo expuesto líneas arriba.
No obstante, ello, consideramos que bajo el mismo criterio de la propuesta de modificación del artículo 8° de la Ley N° 30364 y al objeto del Proyecto de ley bajo comentario, proponemos, el siguiente texto:

Artículo 8° de la Ley N° 30364
Los tipos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar son:
[....]
e) Ciberacoso. Son actos de acoso o intimidación, cometidos, asistidos o agravados por el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (teléfonos móviles, internet, redes sociales, videojuegos, mensajes de texto, correos electrónicos, etc.) contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

Al respecto, la violencia – incluido el ciberacoso – contra la mujer y los integrantes del grupo familiar amerita una especial atención por parte del Estado, debido a las consecuencias graves que impactan no solo sobre las víctimas sino también sobre su entorno familiar. Por ello, el Estado Peruano ha desplegado importantes esfuerzos para combatirla, a fin de proteger la libertad de opinión y de expresión, así como la realización de otros derechos. Adoptando medidas jurídicas y políticas correspondientes, para erradicar la violencia en línea; las cuales deben enmarcarse en el contexto más amplio de los derechos humanos relativos a la discriminación estructural, la violencia y las desigualdades con que se enfrentan, y tratar de crear un entorno propicio para el uso adecuado de las TIC.

La ciberviolencia o violencia digital se manifiesta de muy diversas maneras, algunas con carácter sexual y otras no, entre otras: violencia verbal (insultos, desprecios, etc.) en redes sociales, chats, blogs, email o páginas webs; acceso ilegal a perfiles en redes sociales para humillar o para realizar alguna otra acción; amenazas, coacciones y otros ciberdelitos semejantes efectuados online o por mensajes de texto o whats-app; el cyber-harassment mediante la publicación de teléfonos y/o fotos de mujeres en webs de servicios sexuales para que las molesten; la publicación de fotos de ex novias o ex mujeres desnudas, con o sin comentarios humillantes, sin su consentimiento; la publicación de fotos robadas de mujeres desnudas o en cuartos de baño, duchas, etc.; el uso de dispositivos de espionaje entre parejas (cámaras ocultas, spyware, GPS, etc.); la obligación de revelar contraseñas, eliminar ciertos contactos o enviar fotografías para controlar el lugar en que se encuentran; y la

prohibición de tener y participar en redes sociales. En definitiva, actitudes que se resumen en conductas de aislamiento y control.

Dentro de la normativa interna, encontramos al Decreto Legislativo N° 1410 [norma relevante y específica para la atención de casos de Violencia en línea], que modifica el Código Penal, incorporando los artículos 151-A° (Acoso), 154-B° (Difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual), 176-B° (Acoso sexual) y 176- C° (Chantaje sexual).

La regulación de estos tipos penales responde a que, la violencia se ve recrudecida, cuando los agresores se valen de poderes (instantáneos, controlados y automáticos) como son las nuevas tecnologías, ejerciendo "un nuevo tipo de violencia psicológica sobre sus víctimas". En tal sentido, las nuevas tecnologías de la información o comunicación constituyen un nuevo cauce para la comisión de delitos, al ser un escenario que se enmarca dentro de un plano de ilegalidad, sobre el que existe el anonimato y gran incertidumbre jurídica, causando un grave daño en las víctimas; convirtiéndose así, en un instrumento de violencia.

En esa línea, tenemos a los delitos de acoso y acoso sexual que han sido incorporados al Código Penal mediante Decreto Legislativo N° 1410 [publicado en el Diario Oficial "El Peruano", el 12 de setiembre del 2018], con la finalidad de sancionar al agente cuyo comportamiento esté dirigido a vigilar16, perseguir17, hostigar18, asediar19 o buscar establecer contacto o cercanía con una persona, sin el consentimiento de este/a, de modo que pueda alterar el normal desarrollo de su vida cotidiana o para llevar a cabo actos de connotación sexual.

Es necesario señalar que, el delito de acoso (artículo 151-A° del Código Penal) ha sido incluido en el Título IV ("Delitos contra libertad"), específicamente en el Capítulo I ("Violación contra la libertad personal"); debido a que, tales conductas afectan gravemente el derecho a la libertad, específicamente la libertad personal para desarrollar su vida familiar, social y laboral de manera normal; por lo que, la persona acosada se ve desvalorizada tanto individual como socialmente debido a la constante intimidación que produce el agresor.

En ese sentido, tenemos que el delito de acoso no solo afecta la libertad de las personas, sino que también vulnera directamente la dignidad20 e integridad personal de la víctima, realizando el acosador actos reiterados de persecución y seguimiento que crean aprensión, miedo y, por ende, afectar el desarrollo de la vida cotidiana de la víctima.

Es preciso anotar que, el ciberacoso cuenta con tres aspectos inherentes que afectan decisivamente en esta tipología de violencia: El primero, es el ***anonimato online****. La posibilidad de ser un usuario o usuaria de manera encubierta y sin proveer apenas información personal se traduce directamente en una mayor impunidad para el agresor. El segundo rasgo característico es la* ***facilidad y la accesibilidad*** *a la información a gran escala; a partir de los buscadores y de las redes sociales, es posible identificar direcciones de correo electrónico y de domicilios particulares, números de teléfono, menciones públicas en la red, etc. En este sentido, la participación en las redes sociales puede convertirse en una manera de perseguir y controlar los movimientos de una víctima potencial. Al mismo tiempo, el ciberespacio permite compartir información y material multimedia más allá de las fronteras y bajo un coste mínimo. Por último, el tercer aspecto a destacar es la* ***permanencia digital****, es decir, la dificultad asociada a eliminar material o información del entorno virtual. Junto con ello, es importante tener en cuenta que el ciberespacio es un lugar fuertemente simbolizado donde aquello publicado en referencia a una persona influencia cada vez más en su reputación social y laboral. De este modo, es probable que el acto de odio o violencia dirigido hacia una persona vía Internet permanezca estático en la red y tenga consecuencias a largo plazo sobre el sujeto que lo ha sufrido.*

Como se ha señalado, el delito de acoso sexual cuenta con verbos rectores para su configuración: vigilar, perseguir, hostigar, asediar o buscar establecer contacto o cercanía, los mismos que de forma reiterada o no, se tienen que cumplir al momento de establecer un contacto con la víctima.

*El primer verbo rector es "**Vigilar**", se configura cuando el acosador(a), de forma directa, se dedica constantemente a observar (vigilar) a su víctima (expareja entre otros), ya sea en su domicilio, en su centro de labores o en los lugares que esta frecuenta (restaurantes, discotecas, universidad, etc.); así como de forma indirecta, cuando el acosador(a) envía a un tercero a que vigile a la víctima en los lugares mencionados, o cuando usa constantemente medios tecnológicos, muchas veces creando cuentas falsas para vigilar las redes sociales de la víctima.*

*Un segundo verbo rector es "**Perseguir**", se configura cuando el acosador(a) se dedica a preguntar por su víctima, o simplemente, le sigue a todas partes, o aparece repentinamente frente a ella, en la puerta del centro de estudios o su domicilio, entre otros; sin que estos incluyan actos de vigilancia, sino acudir directamente a los lugares que conoce que concurre su víctima.*

*El tercer verbo rector es "**Hostigar**", que abarca un conjunto de comportamientos molestos de carácter insistente, pues comprende aquellos actos en los que el agente*

propicia situaciones de incomodidad y de molestia hacia la víctima, con lo cual impide que esta desarrolle la vida de paz y tranquilidad a la que tiene derecho. En la práctica, suelen materializarse en insultos y/o ofensas mediante llamadas, mensajes o publicaciones en redes sociales del acosador(a) hacia su víctima.

*En cuanto, al cuarto verbo rector "**Asediar**", se configura cuando el acosador(a) presiona insistentemente a la víctima, para condicionar su comportamiento. Aquí muchas veces, el sujeto activo, mediante una fingida búsqueda de compasión, dirige una serie de ruegos que terminan por asediar a la víctima, lo cual puede propiciar, incluso, sentimientos de culpa que pueden obligarla, al final, a acceder a los requerimientos.*

*Finalmente, el quinto verbo rector es "**Buscar establecer contacto o cercanía**", definida como la búsqueda por parte del acosador(a) de cualquier forma que le ayude a encontrar, a conversar o a estar cerca de su víctima.26 Debemos ser enfáticos, en señalar que, el ciberacoso toma en cuenta la importancia de la tecnología en su comisión, a la vez que prestan atención a las formas de violencia en línea más recurrentes.*

*Por lo antes expuesto, esta Coordinación Nacional en virtud de una interpretación sistemática, coherente e integral con las normas en la materia, **considera que la propuesta de incorporar el artículo 176-Dº al Código Penal, no resultaría viable** […].*
[Resaltado y subrayado es nuestro]

DE HIPERDERECHO

HIPERDERECHO, mediante Carta[23], de fecha 22 de julio de 2024, suscrito por su director ejecutivo, el señor **Dilmar Villena Fernández Baca**, manifiesta su opinión con observaciones, en el siguiente sentido:

"[…] reconocer al ciberacoso como un tipo de violencia en la Ley 30364, si bien apunta a una finalidad constitucionalmente idónea, no abarca de forma completa o integral el reconocimiento de la violencia de género en línea.

La medida propuesta por el Proyecto, de incluir el ciberacoso como un nuevo tipo de violencia, no resulta idónea, pues existen diferentes modalidades de violencia de género en línea, además del ciberacoso. […].

---

[23] https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MjA5NzU1/pdf

[...] incluir nuevamente este delito, incluso con una pena diferente a la establecida actualmente, no resulta adecuado o coherente en el ordenamiento jurídico penal. Cabe recordar que, además del ciberacoso, tanto el acoso sexual (art. 176-B), el chantaje sexual (art. 176-C), como la difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual (art. 154-B) por medios tecnológicos se encuentran también regulados. Todos estos delitos fueron incorporados a través de un paquete normativo, el Decreto Legislativo N°1410, que tenía como finalidad garantizar una lucha eficaz contra las diversas modalidades de violencia que afectan principalmente a las mujeres a lo largo de todo su ciclo de vida."

4.2.5. **Proyecto de Ley 8763/2024-CR**:

Respecto del **Proyecto de Ley 8763/2024-CR** se recibieron las siguientes opiniones:

DEL MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, mediante Oficio N° D001731-2024-MIMP-SG[24], de fecha 14 de octubre de 2024, suscrito por su secretaria general, la señora **Tabata Dulce Vivanco del Castillo**, adjunta el Informe N° D000538-2024-MIMP-OGAJ, elaborado por la Oficina General de Asesoría Jurídica y el Informe N° D000112-2024-MIMP-DPVLV, elaborado por la Dirección de Políticas para una Vida Libre de Violencia del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, manifestando su opinión **FAVORABLE (PARCIALMENTE VIABLE)**, con las siguientes consideraciones:

"[...] los Estados tienen la obligación de adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, para prevenir y erradicar actos de violencia hacia las mujeres; y, asimismo, debe adoptar sin dilaciones todas las políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Por parte de las/los operadores de justicia y, en especial la Policía Nacional del Perú (PNP), deben actuar en forma oportuna, sin dilación por razones procedimentales, formales o de otra naturaleza, ante un hecho o amenaza de violencia, disponiendo el ejercicio de las medidas de protección previstas en la ley y otras normas, con la finalidad de atender efectivamente a la víctima.

El Objetivo Prioritario N° 1 de la PNIG es reducir la violencia hacia las mujeres. La violencia contra la mujer es una forma de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de la mujer de gozar de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre (Recomendación General N° 19). Esta violencia está basada en el género,

[24] https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MjMwMDI3/pdf

por lo cual constituye un problema social que exige respuestas integrales más allá de los casos concretos, autores, víctimas y supervivientes (Recomendación General N° 35).

Los lineamientos vinculados al Objetivo Prioritario N° 1, son: implementar medidas de atención y protección para mujeres víctimas de violencia e integrantes del grupo familiar; e implementar medidas de prevención de la violencia contra las mujeres en favor de la ciudadanía.

La Política Nacional de Igualdad de Género (PNIG) establece quince (15) servicios públicos que deben ser brindados por las instituciones del Estado peruano, de los cuales seis (06) están dirigidos a reducir la violencia hacia las mujeres, los cuales han sido comprendidos en el marco de las acciones priorizadas para la implementación progresiva del Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (SNEJ).

*En tal sentido, **resulta favorable toda medida legislativa y de cualquier otro carácter, orientada a proteger a las mujeres víctimas de violencia, de cara a prevenir nuevos actos de violencia en su contra, y para erradicar los actos de violencia hacia las mujeres; con mayor razón, las destinadas a generar un mayor rango de protección a las víctimas con el uso de las tecnologías emergentes**.*

Ahora bien, mediante Resolución Administrativa N° 000443-2022-CE-PJ, el Poder Judicial aprobó la Directiva N° 024-2022-CE-PJ "Disposiciones para la implementación del Servicio Judicial de Alerta: Botón de Pánico", versión 001.

Dicha Directiva dispone que el Botón de Pánico es el "servicio Judicial de Alerta que se brinda a las víctimas de violencia en riesgo severo, como consecuencia de una resolución judicial que le otorga medidas de protección y dispone la instalación de una herramienta tecnológica en sus celulares a fin de brindarle una atención diligente, célere, eficaz y oportuna, en el marco de la Ley N° 30364, ante un hecho o amenaza de violencia" (artículo 4, numeral 4.3).

*De manera complementaria, el Poder Judicial ha indicado que el Botón de Pánico "es un software que opera **por mandato judicial** en los teléfonos celulares para dar protección efectiva a las víctimas de violencia familiar en casos de riesgo severo [y] permite que las personas que cuentan con medidas de protección, ante un caso de peligro generado por su agresor, ejecute la aplicación enviando su ubicación*

geográfica, en tiempo real, a la central de monitoreo, a fin de que la Policía o el Serenazgo les brinde de manera inmediata el socorro efectivo"2 . (Énfasis agregado)

Por consiguiente, considerando que mediante el Proyecto de Ley N° 8763/2024-CR se propone que la instalación del "Botón de Pánico", en el celular de la denunciante víctima de violencia, se produzca desde el momento de la denuncia policial; ***corresponde que la opinión sobre la viabilidad del Proyecto de Ley la emita el Ministerio del Interior, en tanto es el Ministerio del Poder Ejecutivo del cual depende la Policía Nacional del Perú****.*

Sin perjuicio de lo señalado, el Proyecto de Ley N° 8763/2024-CR ***propone también establecer que la Policía Nacional del Perú (PNP) debe comunicar los hechos denunciados y sobre la instalación del aplicativo "Botón de Pánico" al representante del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) de su jurisdicción para la atención de la víctima en los Centros Emergencia Mujer (CEM); y, de ser el caso en los Hogares de Refugio Temporal****.*
[...]
Por consiguiente, sobre el extremo del Proyecto de Ley N° 8763/2024-CR señalado en el numeral 2.32, ***se opina que la propuesta legislativa es viable****, en tanto actualmente los CEM y, de ser el caso, los HRT, brindan atención a las víctimas de violencia; conforme se ha señalado líneas arriba.*
[Resaltado y subrayado es nuestro]

DEL MINISTERIO PÚBLICO – FISCALÍA DE LA NACIÓN

El Ministerio Público – Fiscalía de la Nación, mediante Oficio N° 005466-2024-MP-FN-SEGFIN[25], de fecha 11 de noviembre de 2024, suscrito por su secretario general, el señor **Miguel Alan Puente Harada**, adjunta el Informe N° 000034-2024-MP-FN-CNFEVCMYGF, elaborado por la Coordinación Nacional de las fiscalías provinciales Corporativas Especializadas en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, manifestando su opinión **FAVORABLE (ES VIABLE)**, con las siguientes consideraciones:

"[...] ***el papel del Estado Peruano no es solamente reactivo para arrestar y sancionar a los culpables por un hecho de violencia; sino que su deber, también es prevenir la comisión de cualquier delito en la medida de sus posibilidades****.*

[25] https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MjMyMzYz/pdf

Por ello, el «Botón de Pánico», funciona como un dispositivo de auxilio que se brinda a las víctimas de violencia; para lo cual, se instala una herramienta tecnológica en sus celulares, a fin de brindarles una atención diligente, célere, eficaz y oportuna, en el marco de la Ley N° 30364, ante un hecho o amenaza de violencia.

Bajo esta perspectiva, esta Coordinación Nacional considera que, ***instalación de la aplicación móvil denominada «Botón de Pánico», desde la denuncia policial, en el celular de la denunciante víctima de violencia, sea cual fuere el nivel riesgo, responde a la necesidad de brindar una atención diligente, célere, eficaz y oportuna a las mujeres y los integrantes del grupo familiar,*** *ante un caso de peligro generado por su agresor, enviando su ubicación geográfica a la central de monitoreo de la Policía Nacional y/o Serenazgo del respectivo municipio, quien (es) brindarán el auxilio correspondiente.*

Por lo antes expuesto, esta Coordinación Nacional en virtud de una interpretación coherente e integral con las normas en la materia, considera que la propuesta de modificar los artículos los artículos 15-A°, 15-B°, 16°, 16-D°, 17°, 17-A°, 22° y 28° de la Ley N°30364, «Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar», ***resultaría viable; lo que permitirá que la persona agraviada sea geolocalizada desde una central de monitoreo y obtener la ayuda oportuna de parte del personal de serenazgo o de la Policía Nacional que se encuentre en la zona.***

III. CONCLUSIÓN

La propuesta legislativa del ***Proyecto de Ley N° 8763/2024-CR es viable,*** *conforme lo que previamente se ha fundamentado.*

En virtud de lo analizado, el botón de pánico es un software que opera por mandato judicial en los celulares para dar protección efectiva a las víctimas de violencia familiar. El dispositivo también permite que las personas que cuentan con medidas de protección, ante un caso de peligro generado por su agresor, ejecute la aplicación enviando su ubicación geográfica, en tiempo real, a la central de monitoreo, a fin de que la Policía o el Serenazgo les brinde de manera inmediata el socorro efectivo.

Al ingresar a dicha aplicación, se seleccionará una de estas tres categorías: feminicidio, violación o maltrato psicológico o físico, y permanecerá en el celular como medio de comunicación entre la víctima y el personal policial ante cualquier hecho de violencia (acercamiento o incumplimiento de medidas de protección).
[Resaltado y subrayado es nuestro]

DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

El Ministerio del Interior, mediante Oficio N° 001496-2024-IN-SG-PCR[26], de fecha 8 de noviembre de 2024, suscrito por su secretario general, el señor **Carlos Alberto Díaz Dañino**, adjunta el Informe N° 001957-2024-IN-OGAJ, elaborado por la Oficina General de Asesoría Jurídica, manifestando su opinión **DESFAVORABLE (NO VIABLE)**, con las siguientes consideraciones:

> *"[b] La propuesta normativa tiene por objeto establecer la instalación de la herramienta tecnológica denominada "Botón de Pánico" desde el momento de la denuncia policial en el celular de la denunciante de víctima de violencia, en el marco de la Ley 30364 Ley para prevenir, sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, ampliando los alcances de la norma.*
>
> *[c] En ese contexto resulta indispensable contar con un análisis costo beneficio adecuado en el proyecto de ley para poder garantizar el financiamiento de la implementación del referido proyecto de ley tomando en cuenta que la instalación del aplicativo "botón de Pánico" en el celular de la víctima, **supone un costo que no ha sido debidamente descrito en la exposición de motivos, siendo necesario contar con la opinión del Ministerio de Economía y Finanzas**.*
>
> *[d] La evaluación costo beneficio es fundamental por cuanto **el Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú, no tiene programada actividades vinculadas a la implementación del proyecto de ley, siendo necesario dimensionar cuál es la proyección de gastos, en bienes y servicios, así como los gastos que supone implementar proyectos de inversión en diversas zonas del país**.*
>
> *[e] En cuanto a los recursos humanos, **la propuesta normativa no ha tenido en cuenta la capacidad de respuesta por parte de la Policía Nacional del Perú para acudir en auxilio de las víctimas que han sido beneficiadas con la instalación del aplicativo "Botón de Pánico"**, tampoco considera el rubro de capacitación al personal PNP que va a intervenir en la instalación del aplicativo "botón de pánico" en el celular de las víctimas, lo cual supone una especialidad en la materia. Debiendo tomar en cuenta el alto grado de rotación del personal PNP frecuentes en las comisarías a nivel nacional.*

[26] https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MjMyMjI2/pdf

[f] En cuanto al tema logístico y equipamiento para la ejecución del proyecto, la propuesta no ha tomado en cuenta que, una vez instalado el aplicativo "botón de pánico", esta va a requerir la realización de visitas periódicas al domicilio de la victimas que cuentan con esa medida, debiendo tenerse en cuenta el número de unidades móviles (patrullas motorizadas) y todos los bienes y servicios que se requieren para el traslado del personal PNP, ***situación que debe ser incorporada en la exposición de motivos dado que se requerir el apoyo de otras entidades vinculadas a la atención de víctimas de violencia a nivel nacional****.*

[g] Por tales razones, proyecto de ley N° 8763/2024-CR, "Ley que establece la instalación del botón de pánico desde la formulación de la denuncia policial por violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar", ***resulta No viable****."*
[Resaltado y subrayado es nuestro]

4.2.6. **Proyecto de Ley 9138/2024-CR**:

Respecto del **Proyecto de Ley 9138/2024-CR** se recibieron las siguientes opiniones:

DEL MINISTERIO PÚBLICO – FISCALÍA DE LA NACIÓN

El Ministerio Público – Fiscalía de la Nación, mediante Oficio N° 005468-2024-MP-FN-SEGFIN[27], de fecha 11 de noviembre de 2024, suscrito por su secretario general, el señor **Miguel Alan Puente Harada**, adjunta el Informe N° 000032-2024-MP-FN-CN- FEVCMYGF, elaborado por la Coordinación Nacional de las fiscalías provinciales Corporativas Especializadas en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, manifestando su opinión **FAVORABLE (PARCIALMENTE VIABLE)**, con las siguientes consideraciones:

"Al respecto, la violencia económica o patrimonial se manifiesta a través de la evasión del cumplimiento de la obligación alimentaria, que se manifiesta cuando el obligado a prestar alimentos y agresor a la vez, le niega "intencionalmente" a la mujer el dinero suficiente para que satisfaga ella y/o hijos sus necesidades básicas como son salud, vivienda, vestimenta, acceso a la salud, entre otros, y utiliza dicha omisión y necesidad alimentaria para coaccionar, manipular, condicionar a la mujer que depende económica del agresor.

Dicha forma de violencia económica cuenta con dos elementos indesligables que deben darse de manera conjunta y al mismo tiempo: (i) El elemento objetivo como es el incumplimiento mismo de la pensión alimenticia por parte del presunto agresor

[27] https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MjMyMzY1/pdf

en un marco de dependencia económica que tiene la mujer, y el daño provocado en ella y/o sus hijos; y (ii) El elemento subjetivo como es la "intención" con la que actúa el agresor de saber que con el incumplimiento de la pensión provocará dicho daño en la mujer, y se manifiesta con actos de manipulación, condicionamiento, coacción y menosprecio por ella.

*En tal sentido, **el incumplimiento alimentario en sus distintas variables (total, parcial, tardío, etc.) por parte del agresor, constituye un modo particularmente insidioso de violencia contra la mujer, porque ocasiona un deterioro de la situación socio económica de la mujer**. Este supuesto se da cuando el obligado (esposo o conviviente o cualquier otro) le niega intencionalmente a la mujer (esposa, conviviente, hija, hermana, etc.) el dinero suficiente para que satisfaga ella y/o hijos sus necesidades elementales, como son la alimentación, vivienda, vestimenta, acceso a la salud, entre otros, dándose en una relación de desigualdad de poder y de detrimento de la dignidad de la mujer.*

***Bajo esta perspectiva, consideramos importante incorporar el numeral 5) en el literal d) Violencia económica o patrimonial, debido a que el Estado Peruano se encuentra obligado actuar con la debida diligencia en tres ámbitos bien definidos: el de prevenir, erradicar y sancionar este tipo de violencia**, puesto que, el incumplimiento del pago de la pensión de alimentos condiciona a la mujer a soportar maltratos los cuales devienen en violencia económica; ya que en muchos casos, el agresor aprovecha la dependencia económica de la víctima para coaccionar, manipular y subordinar a la misma; siendo el elemento objetivo, la omisión del pago de alimentos por el obligado, y el elemento subjetivo, la intención con la que actúa el agresor al mantener su conducta de no pago para causar daños a la mujer y sus hijos.*

*Por lo antes expuesto, esta Coordinación Nacional en virtud de una interpretación sistemática, coherente e integral con las normas en la materia, considera que la propuesta de modificar el artículo 8° de la Ley N° 30364, «Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar», a través de la incorporación del numeral 5) en el literal d) Violencia económica o patrimonial, resultaría viable. **Siendo ello así, podemos decir que, la violencia económica o patrimonial, constituye un tipo de violencia psicológica grave, cuya característica particular es el uso por parte del agresor (esposo, concubino, hermano, empleador, el Estado, etc.) de los recursos patrimoniales con que cuenta una mujer para mantenerla en una situación de desigualdad y ejercicio de poder sobre ella, o en su defecto una forma de menoscabar su estima o valía personal y sobre todo para mantenerla sometida**. Dicha gravedad, no solo radica en que está en juego el*

derecho a la integridad psicológica de la persona, sino también su dignidad como ser humano en toda su amplitud."
[Resaltado y subrayado es nuestro]

4.3. Opiniones ciudadanas:

Respecto del **Proyecto de Ley 4753/2022-CR,** en el Sistema de Proyectos de Ley del Congreso de la República, hasta la fecha de la aprobación del presente dictamen, se ha recibido una opinión ciudadana **EN CONTRA** en el siguiente sentido.

CHRISTIAM ALFONSO DE LA TORRE MARQUEZ
19/06/2024
No se puede violar el derecho a la intimidad. Es anticonstitucional. Pésima iniciativa. Debemos alentar a que primero sea verificado tantas denuncias falsas...

Respecto del **Proyecto de Ley 7429/2023-CR,** en el Sistema de Proyectos de Ley del Congreso de la República, hasta la fecha de la aprobación del presente dictamen, se ha recibido una opinión ciudadana **EN CONTRA** en el siguiente sentido.

ALEJANDRO ARMANDO ADRIANZEN CASTRO
10/07/2024
A más de 15 años de vigencia de la Ley 30364, no se avizora ningún indicador favorable del objetico de ERRADICACIÓN de la violencia intra familiar. Por el contrario, la estadística nos indica un mayor número de denuncias. El problema radica en la pésima normatividad que existe para combatir esta problemática. Por experiencia personal (abogado del Ministerio público, con más de 40 años de servicios), el 98 % de los conflictos intra familiares NO SON DELITOS, por tanto, son factibles de SOLUCIÓN EXTRA JUDICIAL dentro de las 24 horas, con la intervención de FISCALIAS ESPECIALIZADAS EN EL DERECHO DE FAMILIA. Lamentablemente la Ley 30364 erróneamente prohíbe la CONCILIACIÓN entre familiares; generando miles de procesos judiciales innecesarios al modificarse el artículo 122-B mediante el D.L. 1323. Por otro lado, ni el Ministerio Público, el Poder Judicial o la Policía Nacional hacen acciones de PREVENCION. Únicamente se hace acciones de REPRESIÓN, gastando innecesariamente millones de soles en procesos penales largos y tediosos, creando burocráticos JUZGADOS DE FAMILIA únicamente para emitir disposiciones de EXHORTACIÓN, sin dialogar con ninguna de las partes, y, sobre todo, sin analizar violencia los orígenes de los conflictos familiares. Por ello, surge la necesidad de crear equipos técnicos especializados, tanto en el interior del M.P., P.J. como la PNP, para estudiar esta problemática y proponer las fórmulas de solución necesarias e inmediatas.

Respecto del **Proyecto de Ley 7689/2023-CR,** en el Sistema de Proyectos de Ley del Congreso de la República, hasta la fecha de la aprobación del presente dictamen, no se ha recibido ninguna opinión ciudadana.

Respecto del **Proyecto de Ley 8350/2023-CR,** en el Sistema de Proyectos de Ley del Congreso de la República, hasta la fecha de la aprobación del presente dictamen, se han recibido tres (03) opiniones ciudadanas **a favor** y una **en contra**, en el siguiente sentido.

A FAVOR
DONAGHY DIYÉ BERROCAL FRANCISCO
12/07/2024
Dado el gran avance de las tecnologías, considero necesario buscar una forma que las regule, pues las tecnologías se convierten en un medio más por el cual una persona podría ocasionar daños a otra. Por lo tanto, reconocer el ciberacoso como un acto de violencia es fundamental si lo que se busca es evitar causar más afectaciones, pues en la actualidad, las personas tienen más contacto con la tecnología y que no haya medidas para resguardar su seguridad permitirá que esos actos de acoso, estafas, entre otros actos cibernéticos sigan perjudicando a las personas.

IVAN ALEXANDER CAMPOS DIAZ
13/07/2024
Esta conducta del ciberacoso, perpetrada de manera repetitiva o sistemática, busca menoscabar la integridad, dignidad y bienestar de la víctima. Las sanciones aplicables al ciberacoso permitirían que se detengan en el tiempo y dependiendo de la gravedad de los hechos y del impacto generado en la víctima, se estaría garantizando la protección de los derechos fundamentales y el desarrollo de un entorno digital seguro y respetuoso de las personas.

RENATO VACCARO MUTZE
31/08/2024
El proyecto está bien fundamentado y es útil. Algunas sugerencias. • El acoso no solo es de tipo sexual; simplemente puede menoscabar la tranquilidad y la expectativa de privacidad, es decir, ser dejado en paz, con mensajes no sexuales a horas indiscriminadas. Además, también puede ser cometido por mujeres, no solo en su contra. Por eso, tal vez el capítulo IX del C.P. debería cambiar a "violación de la libertad". • El artículo 154-B también debería ser modificado, para incluir la elaboración no autorizada de deepfakes, ya sean de imágenes o audio.

EN CONTRA
BIANCA MILAGROS REATEGUI VEGA
12/07/2024
Hola buenas tardes, tengo un par de observaciones a este proyecto de ley: 1. El ciberacoso se cataloga como un tipo de violencia en línea, es decir, existen otras formas de manifestar la violencia que se genera por medio de internet; por lo que no resultaría idóneo solo abarcar una de ellas. 2. Solo se están contemplado los verbos rectores: acosar e intimidar. 3. Los bienes jurídicos que se busca salvaguardar ("dignidad y honor") entran en conflicto; mientras que, la dignidad como bien jurídico es de persecución pública, los delitos que dañen el honor son privados. 4. En nuestro código penal ya se prevé el ciberacoso, claro que no exactamente con el nombre, pero sí sanciona dicha conducta. El artículo 151-A (acoso) del CP, sanciona a quien de forma reiterada o no, continua o habitual, y por cualquier medio, vigila, persigue, hostiga, asedia o busca establecer contacto o cercanía con una persona sin su consentimiento, de modo que pueda alterar el normal desarrollo de su vida cotidiana. He aquí lo más importante, en el párrafo tercero expresamente señala que la "pena se aplica a quien realiza las mismas conductas valiéndose del uso de cualquier tecnología de la información o de la comunicación". En resumen, esta propuesta busca sancionar conductas que nuestro código penal ya ha incorporado desde el 2018 (véase el Decreto Legislativo No. 1410).

Respecto del **Proyecto de Ley 8763/2024-CR,** en el Sistema de Proyectos de Ley del Congreso de la República, hasta la fecha de la aprobación del presente dictamen, no se ha recibido ninguna opinión ciudadana.

Respecto del **Proyecto de Ley 9138/2024-CR,** en el Sistema de Proyectos de Ley del Congreso de la República, hasta la fecha de la aprobación del presente dictamen, no se ha recibido ninguna opinión ciudadana.

5. ANÁLISIS TÉCNICO LEGAL DE LA PROPUESTA LEGISLATIVA

5.1. Justificación de la acumulación de las iniciativas legislativas

Se han derivado a la Comisión de Mujer y Familia los **Proyectos de Ley 4753/2022-CR; 7429/2023-CR; 7689/2023-CR; 8350/2023-CR; 8763/2024-CR y 9138/2024-CR,** considerando que el objetivo principal de las iniciativas es modificar la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

En vista de la coincidencia en sus finalidades, resulta pertinente acumular dichas iniciativas legislativas para su estudio y dictamen conjunto. Esta acumulación permitirá un análisis integral y coherente, evitando duplicidades y asegurando que las medidas propuestas sean efectivas, pertinentes y claras en nuestro ordenamiento jurídico; con el fin de prevenir la inseguridad jurídica que podría derivarse de múltiples modificaciones previstas a la misma norma.

La acumulación de estas iniciativas legislativas se justifica por las siguientes consideraciones:

- **Coherencia normativa:** La acumulación permitirá elaborar un marco legal coherente y armonizado, evitando la duplicación de esfuerzos y asegurando que las medidas propuestas sean complementarias y no contradictorias.
- **Eficiencia legislativa:** Al discutir y dictaminar estos proyectos de ley en conjunto, se optimiza el uso del tiempo y los recursos del Congreso, permitiendo un proceso más ágil y eficiente.
- **Visión integral:** La acumulación facilita un análisis integral de las propuestas, considerando todas las perspectivas y enfoques, y asegurando que se aborden todas las dimensiones en favor de los niños y adolescentes.
- **Mayor impacto normativo:** Una normativa unificada y comprehensiva tendrá un mayor impacto positivo en la sociedad, al implementar estrategias y políticas públicas de manera coordinada y efectiva.

En ese sentido, dada la coincidencia de los objetivos de los **Proyectos de Ley 4753/2022-CR; 7429/2023-CR; 7689/2023-CR; 8350/2023-CR; 8763/2024-CR y 9138/2024-CR**, la Comisión de Mujer y Familia, concordante al Reglamento del Congreso de la República y a la práctica parlamentaria que establece que, cuando dos [o más] iniciativas legislativas tienen elementos comunes estos deben acumularse en un solo pronunciamiento de la Comisión, por lo que se ha decidido acumularlos para un estudio y dictamen conjunto. Esta medida no solo optimiza el proceso legislativo, sino que también asegura una respuesta más efectiva y coherente a las necesidades previstas en ambas iniciativas legislativas.

Asimismo, como respaldo de esta decisión cabe citar el Acuerdo de Consejo Directivo, Acuerdo 686-2002-2003/CONSEJO-CR que señala en su primera disposición lo siguiente:

> *"Solo se admitirá la acumulación de proyectos de ley y de resolución legislativa con otra en trámite, siempre que éstos se encuentren en la etapa de estudio en Comisiones y el dictamen no haya sido aprobado por la Comisión informante.*

> *Dentro de este plazo, las Comisiones podrán hacer la acumulación de oficio sobre los proyectos de ley y de resolución legislativa que reciban por la vía regular mediante decreto de Oficialía Mayor, elaborado luego de la consulta previa de la Primer Vicepresidencia, de acuerdo con las normas reglamentarias".*

En esa línea, el "Manual de Proceso Legislativo" señala:

> *"(...) la finalidad de las acumulaciones responde a un criterio de consolidación temática, que busca integrar materialmente propuestas legislativas, temática y procesalmente conexas, con un criterio uniforme y coherente, en un dictamen que consolida las iniciativas en una sola propuesta de acto legislativo ante el Pleno; y, a un criterio de economía procesal, que permite tratar de manera más simple y directa lo semejante con lo semejante en el mismo acto, evitando la innecesaria duplicación o reproducción de tareas".*

Por consiguiente, **la acumulación de las propuestas legislativas bajo análisis es reglamentaria debido a la concordancia de los temas que abordan respectivamente.**

5.2. Materia legislable de las iniciativas legislativas

Uno de los principios generales de la técnica legislativa es el **principio de necesidad**. En ese sentido, toda propuesta legislativa presupone la existencia de un problema que se debe enfrentar e intentar solucionar. *"La idea es que la comprensión del hecho o problema deje en claro cuál es el estado de necesidad que se pretende superar. En realidad, de lo que se trata es que, ubicada la necesidad de un determinado grupo humano, se presuma con fundamento que dicha necesidad puede ser abordada y superada mediante una ley"*[28]. Es decir, existe materia legislable cuando se determina que, del análisis del **hecho** o **problema**, se puede implicar que hay materia por legislar.

¿Cuál es el hecho o problema que se pretende resolver con las iniciativas legislativas?

Proyecto de Ley 4753/2022-CR
Del análisis de la Exposición de Motivos del **Proyecto de Ley 4753/2022-CR** se concluye que el problema que se pretende resolver es **la persistente y creciente**

---

[28] Curso de Redacción de Proyectos de Ley, Centro de Capacitación y Estudios Parlamentarios.

violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar en el país, así como la limitada accesibilidad a información sobre antecedentes de agresores registrados en el **Registro Único de Víctimas y Agresores (RUVA)**. Para la autora de la iniciativa legislativa, este acceso restringido dificulta que la sociedad civil, las víctimas y los operadores de justicia puedan identificar oportunamente riesgos relacionados con personas que han cometido actos de violencia, lo que obstaculiza la prevención, protección y sanción de estos actos. La falta de herramientas públicas y accesibles para identificar a agresores ha perpetuado un entorno de inseguridad y ha debilitado la capacidad del Estado y de las instituciones para proteger de manera efectiva a las víctimas de violencia.

Proyecto de Ley 7429/2023-CR

Del análisis de la Exposición de Motivos del **Proyecto de Ley 7429/2023-CR** se concluye que el hecho que se pretende resolver **es un vacío normativo en la Ley 30364, que limita su alcance a contextos de violencia dentro de relaciones familiares, convivenciales o de pareja formal**. Según la autora de la iniciativa, este marco excluye a las víctimas de violencia en relaciones sentimentales o afectivas no convivenciales, como el noviazgo, los esponsales o vínculos similares. La ausencia de una cobertura legal para estas situaciones deja a muchas personas en un estado de vulnerabilidad y sin acceso a medidas de protección ante actos de violencia psicológica, física, sexual o económica.

Proyecto de Ley 7689/2023-CR

Del análisis de la Exposición de Motivos del **Proyecto de Ley 7689/2023-CR** se concluye que el problema que se pretende resolver es **la violencia por desaparición**, un fenómeno creciente en el Perú que afecta principalmente a mujeres, niñas y adolescentes, con más de 31,000 desapariciones reportadas entre enero de 2021 y agosto de 2023, de las cuales solo el 48% fueron encontradas. Este tipo de violencia, vinculada frecuentemente con feminicidios, trata de personas y violencia sexual, no está reconocido explícitamente en la Ley 30364, lo que genera vacíos normativos y dificulta la implementación de medidas efectivas de prevención, protección y sanción. Además, se evidencia una inadecuada atención psicológica y emocional para las familias de las víctimas, así como obstáculos para acceder a la justicia, como la exigencia de requisitos de identificación y la lentitud en la emisión de medidas de protección. La ausencia de un marco normativo específico para esta forma de violencia perpetúa la vulnerabilidad de las víctimas y sus familiares, quienes enfrentan graves consecuencias sociales, emocionales y legales.

Proyecto de Ley 8350/2023-CR

Del análisis de la Exposición de Motivos del **Proyecto de Ley 8350/2023-CR** se concluye que el problema que busca abordar es la **violencia digital (ciberacoso) contra la mujer y los integrantes del grupo familiar**, que persiste como una de las principales preocupaciones en el Perú. A pesar de los avances normativos y las políticas públicas, la aplicación de medidas de protección resulta insuficiente para garantizar la seguridad e integridad de las víctimas. Esto se debe, en gran parte, a las limitaciones en la eficacia de las medidas preventivas, la falta de seguimiento adecuado y la revictimización de las personas afectadas en los procesos judiciales. Asimismo, la persistencia de brechas en la implementación de políticas efectivas revela la necesidad de fortalecer los mecanismos legales para una protección integral y oportuna de las víctimas y sus familiares, asegurando su derecho a vivir libres de violencia.

Proyecto de Ley 8763/2024-CR

Del análisis de la Exposición de Motivos del **Proyecto de Ley 8763/2024-CR** se pretende resolver el problema de la **inadecuada protección y falta de respuesta inmediata ante situaciones de peligro que enfrentan las mujeres y los integrantes del grupo familiar víctimas de violencia**. A pesar de las medidas legales y de protección vigentes, muchas víctimas no cuentan con herramientas efectivas para alertar oportunamente a las autoridades y evitar la escalada de actos de violencia. Esto genera un vacío en la protección inmediata, lo que pone en riesgo la vida, la integridad y la seguridad de las víctimas frente a sus agresores. La propuesta busca superar estas limitaciones mediante la implementación del Botón de Pánico, una herramienta tecnológica diseñada para brindar un mecanismo rápido y eficiente de alerta y respuesta ante emergencias.

Proyecto de Ley 9138/2024-CR

Del análisis de la Exposición de Motivos del **Proyecto de Ley 9138/2024-CR** se pretende resolver el el problema del incumplimiento de las obligaciones alimentarias por parte de los responsables económicos, un acto que afecta gravemente el bienestar de los menores y de los progenitores encargados de su cuidado. Este incumplimiento genera no solo carencias económicas que impactan en el desarrollo físico y emocional de los niños y adolescentes, sino también una sobrecarga en los responsables de la crianza, perpetuando desigualdades y desprotección. El proyecto pretende reconocer esta conducta como una forma de violencia económica, sancionándola y fortaleciendo los mecanismos legales para garantizar el cumplimiento efectivo de las pensiones alimenticias y proteger los derechos fundamentales de las víctimas.

En resumen, la **materia legislable** de los proyectos de ley en evaluación se centra en **perfeccionar la Ley 30364**, a través de un marco normativo más robusto y con reconocimiento de tipos de violencia, así como a implementación del botón de pánico para una protección más efectiva de las mujeres y de los integrantes del grupo familiar que son víctima de violencia.

5.3. Propuesta normativa

Los **Proyectos de Ley 4753/2022-CR; 7429/2023-CR; 7689/2023-CR; 8350/2023-CR; 8763/2024-CR y 9138/2024-CR** para resolver los problemas identificados propone modificar la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, en los siguientes términos:

Ley 30364	Proyectos de Ley 4753/2022-CR; 7429/2023-CR; 7689/2023-CR; 8350/2023-CR; 8763/2024-CR y 9138/2024-CR
Artículo 7. Sujetos de protección de la Ley Son sujetos de protección de la Ley: a. Las mujeres durante todo su ciclo de vida: niña, adolescente, joven, adulta y adulta mayor. b. Los miembros del grupo familiar. Entiéndase como tales, a los cónyuges, excónyuges, convivientes, exconvivientes; padrastros, madrastras; o quienes tengan hijas o hijos en común; las y los ascendientes o descendientes por consanguinidad, adopción o por afinidad; parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad o adopción y segundo grado de afinidad; y quienes habiten en el mismo hogar siempre que no medien relaciones contractuales o laborales, al momento de producirse la violencia.	**Artículo 7. Sujetos de protección de la Ley** Son sujetos de protección de la Ley: a. Las mujeres durante todo su ciclo de vida: niña, adolescente, joven, adulta y adulta mayor. b. Los miembros del grupo familiar. Entiéndase como tales, a los cónyuges, excónyuges, convivientes, exconvivientes; padrastros, madrastras; o quienes tengan hijas o hijos en común; las y los ascendientes o descendientes por consanguinidad, adopción o por afinidad; parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad o adopción y segundo grado de afinidad; y quienes habiten en el mismo hogar siempre que no medien relaciones contractuales o laborales, al momento de producirse la violencia. **También son sujetos de protección los novios, esponsales, y cualquier persona que tengan algún vínculo amoroso-afectivo comprobado.**
Artículo 8. Tipos de violencia Los tipos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar son: [...]. a) Violencia física. [...]. b) Violencia psicológica. [...]. c) Violencia sexual. [...].	**Artículo 8. Tipos de violencia** Los tipos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar son: [...]. a) Violencia física. [...]. b) Violencia psicológica. [...]. c) Violencia sexual. [...].

d) Violencia económica o patrimonial. [...].	d) Violencia económica o patrimonial. Es la acción u omisión que ocasiona un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de las mujeres por su condición de tales o contra cualquier integrante del grupo familiar, en el marco de relaciones de poder, responsabilidad o confianza, por ejemplo, a través de: [...]. **5. Los padres obligados al pago de pensión de alimentos que incurran en tres meses consecutivos o cuatro meses intercalados de mora injustificada, dentro de un mismo año calendario, serán considerados autores del delito de violencia económica.** **e) Violencia por desaparición. Son acciones llevadas a cabo para desaparecer a mujeres por su condición de tal o contra cualquier integrante del grupo familiar.** **e) Ciberacoso. Son actos de acoso o intimidación, cometidos, asistidos o agravados por el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (teléfonos móviles, internet, redes sociales, videojuegos, mensajes de texto, correos electrónicos, etc.) contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, ocasionando un menoscabo a su dignidad y honor.**
Artículo 15. Denuncia [...]. La denuncia puede ser interpuesta por la persona perjudicada o por cualquier otra en su favor, sin necesidad de tener su representación, con el único requisito de que el denunciante sea debidamente identificado por la autoridad que recibe la denuncia, guardando la reserva del nombre en los casos establecidos por ley, y cuando obedezca a causas razonables no previstas en ella, mantendrá la reserva y realizará una intervención de oficio. También puede ser interpuesta por la Defensoría del Pueblo. No se requiere firma de abogado, tasa o alguna otra formalidad. Sin perjuicio de lo expuesto, los profesionales de la salud y educación deben denunciar los casos de violencia	**Artículo 15. Denuncia** [...]. La denuncia puede ser interpuesta por la persona perjudicada o por cualquier otra en su favor, sin necesidad de tener su representación, **el denunciante debe ser identificado** por la autoridad que recibe la denuncia, guardando la reserva del nombre en los casos establecidos por ley, y cuando obedezca a causas razonables no previstas en ella, mantendrá la reserva y realizará una intervención de oficio. También puede ser interpuesta por la Defensoría del Pueblo. No se requiere firma de abogado, tasa o alguna otra formalidad. Sin perjuicio de lo expuesto, los profesionales de la salud y educación deben denunciar los casos de violencia contra la mujer o los integrantes del grupo familiar que conozcan en el desempeño de su actividad. [...].

contra la mujer o los integrantes del grupo familiar que conozcan en el desempeño de su actividad. [...].	
Artículo 15-A. Trámite de la denuncia presentada ante la Policía Nacional del Perú La Policía Nacional del Perú aplica la ficha de valoración de riesgo y, en tanto se dicten y ejecuten las medidas de protección, en los casos de riesgo severo prioriza el patrullaje integrado en las inmediaciones del domicilio de la víctima o de sus familiares, en coordinación con el serenazgo y las organizaciones vecinales; y otras acciones en el marco de sus competencias. Adicionalmente, la Policía Nacional del Perú comunica los hechos denunciados al representante del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de su jurisdicción para la atención de la víctima en los Centros Emergencia Mujer y, de ser el caso, en los hogares de refugio temporal. Cuando los Centros Emergencia Mujer no puedan brindar el servicio, comunica a la Dirección Regional de Defensa Pública correspondiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Culminado el Informe o Atestado Policial y dentro de las veinticuatro (24) horas de conocido el hecho, la Policía Nacional del Perú remite copias de lo actuado a la fiscalía penal y al juzgado de familia, de manera simultánea, a fin de que actúen en el marco de sus competencias. El Informe o Atestado Policial incluye copias de antecedentes policiales de la persona denunciada y otra información relevante para el juzgado. Para una adecuada atención de las denuncias se debe garantizar la existencia de personal policial debidamente calificado. Si la víctima	**Artículo 15-A. Trámite de la denuncia presentada ante la Policía Nacional del Perú** La Policía Nacional del Perú aplica la ficha de valoración de riesgo y, en tanto se dicten y ejecuten las medidas de protección, **sea cual fuere el nivel riesgo, instalará en el celular de la denunciante víctima de violencia la herramienta tecnológica denominada "Botón de Pánico", realizando la inducción sobre las obligaciones y responsabilidades en el buen uso del aplicativo. Si la víctima de violencia es menor de edad, el aplicativo será instalado en el celular del padre, madre, apoderado y/o tutor, siempre y cuando no sean los denunciados.** **En los casos que la denunciante víctima no cuente con equipo celular, la Policía Nacional del Perú priorizará** el patrullaje integrado en las inmediaciones del domicilio de la víctima o de sus familiares, en coordinación con el serenazgo y las organizaciones vecinales; y otras acciones en el marco de sus competencias. Adicionalmente, la Policía Nacional del Perú comunica los hechos denunciados **y sobre la instalación del aplicativo Botón de Pánico** al representante del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de su jurisdicción para la atención de la víctima en los Centros Emergencia Mujer y, de ser el caso, en los hogares de refugio temporal. Cuando los Centros Emergencia Mujer no puedan brindar el servicio, comunica a la Dirección Regional de Defensa Pública correspondiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Culminado el Informe o Atestado Policial y dentro de las veinticuatro (24) horas de conocido el hecho, la Policía Nacional del Perú remite copias de lo actuado, **incluyendo la transformación sobre la instalación del Botón de Pánico, según sea el caso,** a la fiscalía penal y al juzgado de familia, de manera simultánea, a fin de que actúen en el marco de sus competencias. El Informe o Atestado Policial incluye copias de antecedentes policiales de la persona denunciada y otra información relevante para el juzgado. [...].

prefiere ser atendida por personal femenino, se brindará dicha atención asegurándose en los casos en que exista disponibilidad.	
Artículo 15-B. Trámite de la denuncia presentada ante el Ministerio Público La fiscalía penal o de familia, según corresponda, aplica la ficha de valoración de riesgo y dispone la realización de los exámenes y diligencias correspondientes, remitiendo los actuados en el plazo de veinticuatro (24) horas al juzgado de familia, solicitando la emisión de las medidas de protección y cautelares a que hubiera lugar. Las fiscalías penales, paralelamente, deben continuar con el trámite correspondiente, de acuerdo a sus competencias.	**Artículo 15-B. Trámite de la denuncia presentada ante el Ministerio Público** [...] **La Policía Nacional del Perú deberá remitir la información relacionada sobre la ejecución de las funciones de monitoreo y seguimiento de la activación del aplicativo Botón de Pánico.** [...]
Artículo 16. Proceso especial El proceso especial de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar se realiza teniendo en cuenta lo siguiente: [...] d. Las medidas de protección emitidas deben ejecutarse de forma inmediata, independientemente del nivel de riesgo. El plazo desde que se presenta la denuncia hasta que se dictan las medidas de protección no puede exceder de cuarenta y ocho (48) horas.	**Artículo 16. Proceso especial** El proceso especial de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar se realiza teniendo en cuenta lo siguiente: [...] d. Las medidas de protección emitidas deben ejecutarse de forma inmediata, **priorizando el** nivel de riesgo. El plazo desde que se presenta la denuncia hasta que se dictan las medidas de protección no puede exceder de cuarenta y ocho (48) horas. **e) El Juzgado de Familia, conforme a la información remitida por parte de la Policía Nacional del Perú respecto al monitoreo y seguimiento del aplicativo Botón de Pánico, dispondrá la ratificación del uso del aplicativo en el celular de la víctima, con énfasis en casos de presuntos hechos de violación, desaparición y violencia física a menores de edad.**
Artículo 16-D. Investigación del delito La fiscalía penal actúa de acuerdo a lo señalado por el Código Procesal Penal vigente, realiza todas las actuaciones necesarias para la investigación de los hechos y puede requerir información al juzgado de familia, a fin de conocer si persiste y continúa el ejercicio de violencia. Asimismo, debe requerir	**Artículo 16-D. Investigación del delito** La fiscalía penal actúa de acuerdo a lo señalado por el Código Procesal Penal vigente, realiza todas las actuaciones necesarias para la investigación de los hechos y puede requerir información al juzgado de familia, a fin de conocer si persiste y continúa el ejercicio de violencia. **En el caso que, la víctima de violencia continúe con el aplicativo Botón de Pánico instalado en su celular, la fiscalía penal deberá coordinar con la Policía**

información a la Policía Nacional del Perú y al Poder Judicial sobre los antecedentes de violencia de la persona denunciada, cuando estos no obren en el expediente. Las Fiscalías Penales o las que cumplen sus funciones priorizarán la tramitación de los casos de riesgo severo.	**Nacional del Perú sobre su seguimiento y monitoreo, a efectos de contar con mayores elementos para la ejecución de las acciones dentro de su competencia.** **[...].**
Artículo 17. Flagrancia En caso de flagrante delito, vinculado a actos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, la Policía Nacional del Perú procede a la inmediata detención de la persona agresora, incluso allanando su domicilio o el lugar donde estén ocurriendo los hechos; también procede el arresto ciudadano, de acuerdo a lo establecido en el Código Procesal Penal. En estos casos, la policía redacta un acta en la que se hace constar la entrega de la persona detenida y las demás circunstancias de la intervención, debiendo comunicar inmediatamente los hechos a la fiscalía penal para continuar con las investigaciones correspondientes y al juzgado de familia para que se pronuncie sobre las medidas de protección y otras medidas para el bienestar de las víctimas.	**Artículo 17. Flagrancia** En caso de flagrante delito, vinculado a actos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, la Policía Nacional del Perú procede a la inmediata detención de la persona agresora, incluso allanando su domicilio o el lugar donde estén ocurriendo los hechos; también procede el arresto ciudadano, de acuerdo a lo establecido en el Código Procesal Penal. En estos casos, la policía redacta un acta en la que se hace constar la entrega de la persona detenida, **la instalación del aplicativo Botón de Pánico** y las demás circunstancias de la intervención, debiendo comunicar inmediatamente los hechos a la fiscalía penal para continuar con las investigaciones correspondientes y al juzgado de familia para que se pronuncie sobre las medidas de protección y otras medidas para el bienestar de las víctimas. **Asimismo, se aplicará el mismo procedimiento de flagrancia, cuando la víctima de violencia hace uso del aplicativo Botón de Pánico debido a que se encuentra en una situación de riesgo, para lo cual la Policía Nacional con apoyo del Serenazgo acudirá al domicilio de la víctima o donde se encuentra geolocalizada y actuará conforme a sus competencias.**
Artículo 17-A. Flagrancia en casos de riesgo severo En los casos de flagrancia en los que se advierta la existencia de riesgo severo, la fiscalía penal solicita la intervención del Programa de Protección de Asistencia de Víctimas y Testigos del Ministerio Público, que actúa de acuerdo a sus competencias. También puede solicitar dicha intervención en los casos de riesgo leve o moderado, cuando lo considere necesario.	**Artículo 17-A. Flagrancia en casos de riesgo severo** En los casos de flagrancia en los que se advierta la existencia de riesgo severo, la fiscalía penal solicita la intervención del Programa de Protección de Asistencia de Víctimas y Testigos del Ministerio Público, que actúa de acuerdo a sus competencias. También puede solicitar dicha intervención en los casos de riesgo leve o moderado, cuando lo considere necesario. En el primer supuesto del párrafo anterior, en la formalización de la denuncia o el inicio de la investigación preparatoria, la fiscalía penal solicita al

En el primer supuesto del párrafo anterior, en la formalización de la denuncia o el inicio de la investigación preparatoria, la fiscalía penal solicita al juzgado penal que emita las medidas de protección a favor de la víctima, para salvaguardar su vida e integridad. El juzgado penal se pronuncia sobre las medidas de protección en la audiencia única de incoación del proceso inmediato, y, en un plazo no mayor de veinticuatro (24) horas, remite copias certificadas al juzgado de familia, a fin de que las ratifique, amplíe o varíe, según corresponda.	juzgado penal que emita las medidas de protección a favor de la víctima, para salvaguardar su vida e integridad; **asimismo, solicitará la continuidad del uso del aplicativo Botón de Pánico en el celular de la víctima, o en el caso de menor de edad, en el celular de la madre, padre, apoderado y/o tutor, según corresponda.** El juzgado penal se pronuncia sobre las medidas de protección en la audiencia única de incoación del proceso inmediato, y, en un plazo no mayor de veinticuatro (24) horas, remite copias certificadas al juzgado de familia, a fin de que las ratifique, amplíe o varíe, según corresponda. **En esta etapa también evaluará la continuidad del uso del aplicativo en el Botón de Pánico de la denunciante víctima de violencia.**
Artículo 22. Objeto y tipos de medidas de protección El objeto de las medidas de protección es neutralizar o minimizar los efectos nocivos de la violencia ejercida por la persona denunciada, y permitir a la víctima el normal desarrollo de sus actividades cotidianas; con la finalidad de asegurar su integridad física, psicológica y sexual, o la de su familia, y resguardar sus bienes patrimoniales. El juzgado las dicta teniendo en cuenta el riesgo de la víctima, la urgencia y necesidad de la protección y el peligro en la demora. Entre las medidas de protección que pueden dictarse en los procesos por actos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar se encuentran las siguientes: [...] 10. Tratamiento psicológico para la recuperación emocional de la víctima. [...].	**Artículo 22. Objeto y tipos de medidas de protección** El objeto de las medidas de protección es neutralizar o minimizar los efectos nocivos de la violencia ejercida por la persona denunciada, y permitir a la víctima el normal desarrollo de sus actividades cotidianas; con la finalidad de asegurar su integridad física, psicológica y sexual, o la de su familia, y resguardar sus bienes patrimoniales. El juzgado las dicta teniendo en cuenta el riesgo de la víctima, la urgencia y necesidad de la protección y el peligro en la demora. Entre las medidas de protección que pueden dictarse en los procesos por actos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar se encuentran las siguientes: [...] 10. Tratamiento psicológico para la recuperación emocional de la víctima. **Además, para sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad, en caso de violencia por desaparición.** **[...].** **13. Continuidad del uso del aplicativo Botón de Pánico en la denunciante víctima de violencia, estableciendo conforme al monitoreo y seguimiento del aplicativo por parte de la Policía Nacional y la fiscalía penal, si el mismo continuará hasta el término del proceso judicial o hasta la etapa que considere pertinente, según corresponda.**
Artículo 28. Valoración del riesgo	**Artículo 28. Valoración del riesgo** **[...]**

En casos de denuncias por violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público o el Poder Judicial aplican la ficha de valoración del riesgo, que corresponda a cada caso. También deben aplicarla cuando toman conocimiento de hechos de violencia durante el desempeño de otras funciones. La Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público deben remitir la ficha de valoración de riesgo al juzgado de familia, conforme al proceso regulado en la presente ley, el cual la evalúa para su pronunciamiento sobre las medidas de protección y cautelares y debe ser actualizada cuando las circunstancias lo ameriten, lo que incluye la posibilidad de variar la evaluación del riesgo.	**Asimismo, en dicha ficha de valoración de riesgo deberá figurar la información sobre la instalación del aplicativo Botón de Pánico en el celular de la denunciante víctima de violencia o en el caso que la víctima sea menor de edad, deberá consignarse el registro de la persona responsable de la menor a quien se ha instalado el aplicativo mencionado (padre, madre, apoderado y/o tutor), según corresponda. De no haberse podido instalar el aplicativo, deberá señalarse que medidas alternativas se aplicarán en el caso denunciado.**
Artículo 42. Registro Único de Víctimas y Agresores (RUVA) y Registro Nacional de Condenas El Registro Único de Víctimas y Agresores es un registro administrativo encargado de suministrar un banco de datos actualizado con información que permita identificar y perfilar a las víctimas y sus agresores, como instrumento de conocimiento adecuado para dirigir la acción tanto preventiva como investigadora por parte de los actores competentes. En el marco de la Ley 30364, el RUVA tiene como finalidad, brindar información a los operadores y operadoras de justicia e instituciones intervinientes, para coadyuvar en la toma de decisiones destinadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Con el objeto de implementar un sistema intersectorial de registro de casos de violencia contra las mujeres y los	**Artículo 42. Registro Único de Víctimas y Agresores (RUVA) y Registro Nacional de Condenas** El Registro Único de Víctimas y Agresores es un registro administrativo encargado de suministrar un banco de datos actualizado con información que permita identificar y perfilar a las víctimas y sus agresores, como instrumento de conocimiento adecuado para dirigir la acción tanto preventiva como investigadora por parte de los actores competentes. En el marco de la Ley 30364, el RUVA tiene como finalidad, brindar información a los operadores y operadoras de justicia e instituciones intervinientes, para coadyuvar en la toma de decisiones destinadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Con el objeto de implementar un sistema intersectorial de registro de casos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, denominado Registro Único de Víctimas y Agresores, el Ministerio Público, en coordinación con la Policía Nacional del Perú, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a través del Instituto Nacional Penitenciario, el Poder Judicial, el Ministerio de Salud, y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, es el responsable del registro de dichos casos, en el que se consignan todos

integrantes del grupo familiar, denominado Registro Único de Víctimas y Agresores, el Ministerio Público, en coordinación con la Policía Nacional del Perú, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a través del Instituto Nacional Penitenciario, el Poder Judicial, el Ministerio de Salud, y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, es el responsable del registro de dichos casos, en el que se consignan todos los datos de la víctima y del agresor, la tipificación, las causas y consecuencias de la violencia, la existencia de denuncias anteriores, la atención en salud y sus resultados y otros datos necesarios para facilitar la atención de las víctimas en las diferentes instituciones del Sistema Nacional. El RUVA es un registro diferenciado del Registro Nacional de Condenas en el que figuran todas las personas con sentencias condenatorias consentidas y/o ejecutoriadas por los delitos relacionados a las distintas formas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Cualquier persona puede acceder a la información existente en el Registro Nacional de Condenas de conformidad con el procedimiento establecido, sin restricción alguna.	los datos de la víctima y del agresor, la tipificación, las causas y consecuencias de la violencia, la existencia de denuncias anteriores, la atención en salud y sus resultados y otros datos necesarios para facilitar la atención de las víctimas en las diferentes instituciones del Sistema Nacional. El RUVA es un registro diferenciado del Registro Nacional de Condenas en el que figuran todas las personas con sentencias condenatorias consentidas y/o ejecutoriadas por los delitos relacionados a las distintas formas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Cualquier persona puede acceder a la información existente en el Registro Nacional de Condenas de conformidad con el procedimiento establecido, sin restricción alguna. **El Registro Único de Victimas y Agresores tiene carácter público, el Poder Judicial y las autoridades competentes, permitirán el acceso de la información a través de su página web, sin restricciones alguna a todo ciudadano que lo requiera.**
CÓDIGO PENAL Decreto Legislativo 635	**Proyecto de Ley 8350/2023-CR**
	Artículo 176-D. Ciberacoso El que acosa o intimida, mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, que dañe la dignidad y el honor de las mujeres e integrantes del grupo familiar, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de dos ni mayor de cinco años y con treinta a ciento veinte días-multa e inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos 5, 9, 10 y 11 del artículo 36 del presente Código.

5.3. Análisis técnico sobre la necesidad, viabilidad y oportunidad de la propuesta legislativa

Habiéndose concluido que sí existe materia legislable en la iniciativa legislativa, siendo ésta la de **perfeccionar la Ley 30364**, a través de un marco normativo más robusto y con reconocimiento de tipos de violencia, así como a implementación del botón de pánico para una protección más efectiva de las mujeres y de los integrantes del grupo familiar que son víctima de violencia.; ahora corresponde, analizar las opiniones recibidas de las entidades especializadas para evaluar las posibles observaciones a la **necesidad**, la **viabilidad** y la **oportunidad** de la propuesta normativa en resolver los problemas identificados.

En suma, se busca justificar por qué es indispensable la nueva regulación y demostrar que responde a una necesidad pública relevante y urgente. En ese sentido se analizará de cada uno de los artículos propuestos para su modificación.

¿ES NECESARIO MODIFICAR EL ARTÍCULO 7 DE LA LEY 30364?

El **Proyecto de Ley 7429/2023-CR**, que busca ampliar los sujetos de protección en la Ley 30364, ha sido objeto de análisis técnico por parte del **Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP)**, el cual emitió una opinión desfavorable, concluyendo que la propuesta resulta innecesaria y redundante con los alcances actuales de la normativa vigente. **El ministerio fundamenta su posición destacando que la Ley 30364 ya incluye dentro de su marco de protección a las relaciones de pareja y vínculos afectivos, independientemente de la convivencia, siempre que se identifiquen dinámicas de violencia basadas en poder, control o asimetría**.

El MIMP señala que **la definición de violencia contra las mujeres en la Ley 30364 comprende cualquier acción u omisión que cause daño, sufrimiento o afecte la integridad física, sexual o psicológica de las mujeres, sin restringirla exclusivamente a relaciones convivenciales o familiares**. Por tanto, las mujeres en relaciones de pareja no convivenciales ya son consideradas sujetos de protección bajo esta ley y tienen acceso a medidas preventivas y de protección. Asimismo, se destaca que los términos "novios" o "esponsales", utilizados en el proyecto, no aportan claridad o beneficios adicionales a la normativa vigente, dado que dichos términos han caído en desuso y no afectan el tratamiento igualitario de las víctimas.

El MIMP también critica la falta de análisis cuantitativo y cualitativo en el proyecto que justifique la necesidad de esta modificación, afirmando que no se evidencia un

problema que no esté ya cubierto por la legislación actual. Además, recuerda que los sujetos de protección de la Ley 30364 ya incluyen a las mujeres en relaciones de pareja, independientemente de su condición de convivencia, como parte del enfoque integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género.

En línea con esta evaluación, la **Comisión de Mujer y Familia** coincide con las observaciones planteadas por el MIMP. **La Comisión considera que la propuesta legislativa resulta innecesaria**, ya que la protección legal ofrecida por la Ley 30364 es suficientemente amplia y cubre las situaciones descritas en el proyecto. Asimismo, la incorporación de términos como "novios" o "esponsales" no añade valor práctico ni normativo, ya que estas relaciones de pareja ya están implícitamente protegidas en el marco legal vigente.

Por estas razones, **la Comisión de Mujer y Familia concluye que no es necesario modificar el artículo 7 de la Ley 30364, puesto que la ampliación propuesta no generaría beneficios adicionales en la protección de las víctimas de violencia**, siendo redundante con el alcance actual de la normativa. La Comisión ratifica su compromiso de continuar trabajando en propuestas legislativas que realmente fortalezcan la prevención y erradicación de la violencia de género, sin duplicar esfuerzos ya existentes en el sistema jurídico.

¿ES NECESARIO MODIFICAR EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY 30364?

Sobre la violencia por desaparición por particulares

La Comisión de Mujer y Familia ha analizado exhaustivamente las opiniones remitidas por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y el Ministerio Público - Fiscalía de la Nación en relación con el **Proyecto de Ley 7689/2023-CR** que propone modificar el artículo 8 de la Ley 30364, a fin de reconocer expresamente la violencia por desaparición como un tipo específico de violencia.

El **Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP)** destaca que la desaparición por particulares ya está reconocida como una modalidad de violencia en el Reglamento de la Ley 30364, tras su modificación mediante el Decreto Supremo 005-2022-MIMP. Además, señala que el ordenamiento jurídico vigente, incluyendo el Decreto Legislativo 1428 y su reglamento, regula de manera específica los casos de desaparición. **Según esta perspectiva, la incorporación de esta forma de violencia en el texto de la Ley 30364 podría ser redundante, ya que la normativa vigente ya incluye mecanismos para prevenir, atender y sancionar la desaparición de mujeres y de integrantes del grupo familiar**.

Por otro lado, el MIMP resalta la importancia de describir adecuadamente esta forma de violencia si se decide incorporarla en la ley. Esto debe hacerse bajo los parámetros internacionales, como los establecidos en la Recomendación General N° 2 del Comité de Expertas del MESECVI, donde la desaparición de mujeres por particulares se define como una privación de libertad en razón de género, acompañada o no de otras formas de violencia como la trata, la violencia sexual o el feminicidio.

Por otro lado, el **Ministerio Público - Fiscalía de la Nación** considera que la propuesta es viable y relevante, ya que visibiliza la desaparición como una forma de violencia que genera graves violaciones a los derechos humanos y un profundo impacto emocional en las familias de las víctimas. Subraya que el reconocimiento explícito en la Ley 30364 reforzaría la capacidad del Estado para atender de manera más eficiente esta problemática, alineándose con las obligaciones internacionales del Perú bajo tratados como la Convención de Belém do Pará y la CEDAW.

El **Ministerio Público** también enfatiza que la intervención estatal debe darse con una debida diligencia reforzada desde el momento del reporte de desaparición, bajo la presunción de que la persona está viva. Este enfoque es clave para prevenir que las personas desaparecidas sean víctimas de otras formas de violencia, como la trata o el feminicidio.

Entonces, tras valorar ambas opiniones, **la Comisión de Mujer y Familia reconoce que, si bien la normativa vigente ya contempla la desaparición por particulares como una modalidad de violencia, la incorporación explícita de esta forma de violencia en el texto de la Ley 30364 resulta necesaria para fortalecer la protección de las mujeres y los integrantes del grupo familiar**. Este reconocimiento formal en la ley permitirá una mayor visibilización de la problemática, fomentará un enfoque más claro en su tratamiento y garantizará la adopción de medidas más contundentes en su prevención y atención.

La Comisión coincide con el Ministerio Público en que la modificación del artículo 8 de la Ley 30364 es viable y responde a las recomendaciones internacionales que el Perú debe cumplir. Asimismo, valora la observación del MIMP sobre la necesidad de describir adecuadamente esta forma de violencia en la ley para evitar confusiones y garantizar una interpretación alineada con los estándares internacionales.

En este sentido, la Comisión optará por incorporar en el artículo 8 de la Ley 30364 la **violencia por desaparición** como un tipo específico de violencia, describiéndola

de manera precisa y en concordancia con las recomendaciones internacionales. Este cambio no solo refuerza la normativa vigente, sino que también reafirma el compromiso del Estado peruano con la erradicación de toda forma de violencia de género.

La Comisión de Mujer y Familia considera pertinente modificar el artículo 8 de la Ley 30364 para incluir de manera expresa la desaparición por particulares como una forma de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Esta decisión busca garantizar un marco normativo más sólido y coherente que permita atender de manera efectiva esta problemática, alineándose con las obligaciones internacionales del Estado peruano y con las necesidades de las víctimas y sus familias. Para hacer viable esta decisión se propondrá un texto sustitutorio.

Sobre el ciberacoso

El **Proyecto de Ley 8350/2023-CR** propone incorporar el ciberacoso como un nuevo tipo de violencia en la Ley 30364. Al respecto, se han recibido opiniones divergentes del **Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP)**, el **Ministerio Público - Fiscalía de la Nación**, y **Hiperderecho**, las cuales han sido evaluadas en profundidad por la Comisión de Mujer y Familia. A continuación, se presenta un análisis de dichas opiniones, seguido de la decisión adoptada por la Comisión.
El MIMP emitió una opinión **desfavorable**, argumentando que el ciberacoso no debe considerarse como un tipo de violencia autónomo, sino como una modalidad de violencia que ya está reconocida en la Ley 30364, a través de su reglamento, bajo el término "violencia a través de las tecnologías de la información y comunicación (TIC)." Según el MIMP, el ciberacoso puede manifestarse en formas que ya están vinculadas a los tipos de violencia reconocidos en la ley, como la violencia psicológica y sexual. Además, sostuvo que la propuesta es innecesaria porque la regulación vigente y el Código Penal ya contemplan mecanismos para abordar este fenómeno.

El **Ministerio Público** emitió una opinión **parcialmente favorable**, reconociendo la relevancia de sancionar el ciberacoso como una forma de violencia. Argumentó que esta problemática tiene múltiples dimensiones que afectan gravemente a las víctimas, tanto en el ámbito privado como en el público. La Fiscalía sugirió la incorporación del ciberacoso como un tipo de violencia en el artículo 8 de la Ley 30364, pero también señaló la necesidad de un enfoque más amplio y sistemático para abordar la ciberviolencia en su conjunto.

La organización **Hiperderecho** manifestó observaciones, argumentando que reconocer únicamente el ciberacoso como un tipo de violencia en la Ley 30364 es insuficiente y no aborda de manera integral las diversas modalidades de violencia de género en línea. También destacó que el ordenamiento jurídico penal ya contempla delitos relacionados, como el acoso sexual, el chantaje sexual y la difusión no consentida de material íntimo, por lo que la propuesta podría generar redundancia legislativa.

Tras evaluar las opiniones recibidas, la **Comisión de Mujer y Familia coincidió con la posición del MIMP** y decidió **no modificar el artículo 8 de la Ley 30364** para incorporar el ciberacoso como un tipo de violencia. La Comisión argumentó que:

1. El ciberacoso ya está reconocido como una modalidad de violencia en la normativa vigente bajo "violencia a través de las TIC."
2. Ampliar las tipologías de violencia sin un análisis integral podría generar redundancia y afectar la coherencia legislativa.
3. La legislación penal existente y las normativas específicas, como el Decreto Legislativo 1410, ofrecen mecanismos adecuados para sancionar las diversas formas de ciberviolencia.

Por lo tanto, la Comisión considera que el reconocimiento del ciberacoso como un tipo de violencia autónomo en la Ley 30364 no es necesario ni aporta un valor añadido significativo al marco legal actual. En cambio, se insta a fortalecer la implementación de las normativas vigentes para garantizar una respuesta efectiva frente a la violencia en línea.

Sobre la demora en el pago de pensiones alimenticias como violencia económica

El análisis de la propuesta del **Proyecto de Ley 9138/2024-CR**, en relación con la Ley 30364 y la opinión del Ministerio Público, revela elementos importantes para valorar su viabilidad y necesidad. Según el artículo 8, literal d), de la Ley 30364, la violencia económica o patrimonial ya incluye como una manifestación de este tipo de violencia la "evasión del cumplimiento de las obligaciones alimentarias". Esto abarca la omisión de brindar recursos para satisfacer las necesidades básicas de las mujeres o los integrantes del grupo familiar, incluso en el contexto de relaciones de poder, como se detalla en el numeral 3 del mismo literal.

El Ministerio Público apoya parcialmente la propuesta del **Proyecto de Ley 9138/2024-CR** al considerar que podría fortalecerse la regulación mediante la incorporación de un nuevo numeral que desarrolle más específicamente los

elementos objetivos y subjetivos del incumplimiento alimentario como una forma de violencia económica. Se resalta que este tipo de violencia, intencionado y con el propósito de manipular o coaccionar a la mujer, perpetúa situaciones de desigualdad y afecta la dignidad humana. Sin embargo, el propio análisis del Ministerio Público describe esta conducta como ya contemplada dentro del marco vigente, enfatizando la necesidad de prevención, erradicación y sanción.

La **Comisión de Mujer y Familia**, considerando los argumentos legales y la normativa vigente, concluye que la incorporación de un numeral adicional al literal d) del artículo 8 de la Ley 30364 no es estrictamente necesaria, ya que la normativa actual abarca suficientemente las conductas que el **Proyecto de Ley 9138/2024-CR** busca regular. En su lugar, se exhorta a todas las entidades involucradas en la ley a fortalecer su implementación efectiva, mejorando la capacitación de operadores de justicia, optimizando los mecanismos de cumplimiento y sensibilizando sobre los derechos relacionados con la violencia económica. Así se evitaría una redundancia normativa y se centraría en la eficacia práctica de la protección de los derechos de las víctimas.

¿ES NECESARIO MODIFICAR EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY 30364?

La propuesta del **Proyecto de Ley 7689/2023-CR** busca modificar el artículo 15 de la Ley 30364, incorporando el requisito de una "debida identificación" al momento de presentar una denuncia. Al respecto, el **Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP)** ha emitido una opinión técnica que considera no viable esta propuesta, argumentando que podría generar una interpretación errónea que afecte el acceso a la justicia para las víctimas de violencia.

El MIMP señala que el artículo 16.1 del Reglamento de la Ley 30364 ya establece que tanto las víctimas como las personas denunciantes deben identificarse ante la autoridad receptora, pero aclara que no contar con un documento de identidad no constituye un impedimento para la recepción de la denuncia. Este principio se fundamenta en el enfoque de intervención inmediata y oportuna, así como en el enfoque intercultural, permitiendo que las denuncias sean aceptadas verbalmente, por escrito o mediante medios digitales, garantizando así un acceso amplio y sin barreras a los mecanismos de justicia.

El ministerio resalta que la inclusión del término "debida identificación" en el texto legal podría ser interpretado de manera restrictiva por los operadores de justicia, quienes podrían considerar obligatorio portar un documento de identidad físico o análogo en el momento de la denuncia. Esto generaría una barrera injustificada para

las personas en situación de vulnerabilidad que no cuenten con dicho documento, afectando negativamente su derecho de acceso a la justicia y contraviniendo los principios de la Ley 30364.

La **Comisión de Mujer y Familia**, tras analizar las consideraciones del MIMP, coincide plenamente con sus observaciones. Reconoce que la redacción vigente del artículo 16.1 del Reglamento ya garantiza que la falta de un documento de identidad no sea un obstáculo para denunciar actos de violencia. Modificar el artículo 15 de la Ley 30364 en los términos propuestos podría generar confusión normativa, obstaculizando el acceso a la justicia para las víctimas y contradiciendo los objetivos fundamentales de la Ley.

En consecuencia, **la Comisión concluye que no es necesario ni favorable modificar el artículo 15 de la Ley 30364 en los términos propuestos por el Proyecto de Ley 7689/2023-CR**. En lugar de ello, se debe reforzar la capacitación de los operadores de justicia para asegurar una interpretación adecuada de la normativa vigente, garantizando siempre la accesibilidad y protección de los derechos de las víctimas.

La **Comisión de Mujer y Familia** acepta las observaciones formuladas por el MIMP y, en línea con las mismas, **desestima la propuesta de modificación del artículo 15 de la Ley 30364**, reafirmando que la normativa vigente ya asegura un acceso amplio y sin restricciones a los mecanismos de justicia para las víctimas de violencia.

¿ES NECESARIO MODIFICAR EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY 30364?

El **Proyecto de Ley 7689/2023-CR** propone modificar el literal d) del artículo 16 de la Ley 30364 con el objetivo de ajustar los plazos para la emisión de medidas de protección en función del nivel de riesgo de las víctimas de violencia. Al respecto, el **Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP)** ha emitido una opinión técnica que considera no viable esta propuesta, argumentando que no toma en cuenta los cambios ya introducidos al artículo 16 por la Ley 31715 del 21 de marzo de 2023.

La Ley 31715 estableció una unificación de los plazos para dictar medidas de protección a un máximo de 24 horas, independientemente del nivel de riesgo (leve, moderado o severo), priorizando la necesidad de la víctima. Además, en los casos de riesgo severo, la norma permite al juez prescindir de la audiencia para garantizar una respuesta inmediata. Esta reforma fue diseñada para agilizar la emisión de medidas de protección y fortalecer la protección de las víctimas, eliminando diferencias de tratamiento según el nivel de riesgo.

El informe del MIMP, respaldado por la Dirección de Prevención de la Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar (DPVLV), destaca que la propuesta legislativa no realiza un análisis integral de los cambios introducidos por la Ley 31715, lo que genera incoherencias con la normativa actual. En particular, la propuesta no toma en consideración que la legislación vigente ya asegura la celeridad y uniformidad en la emisión de medidas de protección, priorizando siempre los casos más graves.

Tras un análisis detallado, la Comisión de Mujer y Familia coincide plenamente con las observaciones del MIMP. Considera que **la modificación propuesta al artículo 16 de la Ley 30364 resulta innecesaria y podría generar confusión normativa, dado que la legislación vigente ya contempla mecanismos adecuados y eficaces para proteger a las víctimas de violencia**. Además, la unificación de los plazos a 24 horas responde de manera efectiva a la necesidad de garantizar una respuesta rápida y oportuna, en concordancia con los principios de intervención inmediata y protección integral de las víctimas.

En atención a lo expuesto, la **Comisión de Mujer y Familia acepta las observaciones formuladas por el MIMP y concluye que no es necesario modificar el artículo 16 de la Ley 30364 en los términos propuestos por el Proyecto de Ley 7689/2023-CR**. La normativa vigente ya cumple con los objetivos de la Ley y garantiza la celeridad en la emisión de medidas de protección, acorde con el nivel de riesgo de las víctimas y las necesidades de protección inmediata. Por tanto, se desestima esta propuesta legislativa en este extremo.

¿ES NECESARIO MODIFICAR EL ARTÍCULO 22 DE LA LEY 30364?

El **Proyecto de Ley 7689/2023-CR** propone extender el numeral 10 del artículo 22 de la Ley 30364, estableciendo como medida de protección el tratamiento psicológico para la recuperación emocional de los familiares hasta el segundo grado de consanguinidad, en casos de violencia por desaparición. Al respecto, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) ha emitido una opinión técnica que señala que esta medida, aunque valiosa, no debería considerarse propiamente como una medida de protección, dado que las medidas en cuestión están orientadas principalmente a neutralizar los efectos de la violencia ejercida por la persona denunciada sobre la víctima directa.

El MIMP argumenta que las medidas de protección están diseñadas para resguardar la vida, integridad o libertad personal de las víctimas y su núcleo familiar

inmediato. **Según su interpretación, la propuesta podría exceder el alcance del artículo 22, ya que el sufrimiento de los familiares de las víctimas de violencia por desaparición, aunque relevante, no sería directamente atribuible a la agresión del denunciado, lo que dificultaría considerarlo una medida de protección en sentido estricto**.

No obstante, tras un análisis exhaustivo del texto de la Ley 30364, la **Comisión de Mujer y Familia** considera que las medidas de protección no solo están dirigidas exclusivamente a la víctima directa, sino que también pueden ser aplicables a los familiares, como se desprende de las disposiciones del artículo 22. Este artículo reconoce que el objeto de las medidas de protección incluye "asegurar la integridad física, psicológica y sexual, o la de su familia". Esto permite una interpretación más amplia, que abarca a los familiares cercanos de las víctimas cuando el daño emocional o psicológico es una consecuencia directa de la violencia ejercida.

Asimismo, la propuesta legislativa tiene un fundamento sólido al destacar el impacto emocional devastador que la desaparición de un familiar puede causar en el entorno familiar. Este sufrimiento justifica la necesidad de un acompañamiento psicológico como una medida de protección integral, que permita a los familiares afrontar las consecuencias de la violencia y prevenir efectos secundarios que puedan prolongar el daño psicológico.

Por tanto, **la Comisión de Mujer y Familia no comparte la posición del MIMP y considera que el artículo 22 debe ser modificado para reconocer expresamente el derecho de los familiares de las víctimas de violencia por desaparición a recibir tratamiento psicológico como parte de las medidas de protección**. Esta inclusión no solo amplía el alcance de la Ley 30364, sino que también responde a las necesidades reales de las familias afectadas, fortaleciendo el enfoque integral de la protección contra la violencia.

En virtud de lo anterior, **la Comisión de Mujer y Familia concluye que el artículo 22 de la Ley 30364 será modificado, incorporando como medida de protección el acceso al tratamiento psicológico para los familiares hasta el segundo grado de consanguinidad en casos de violencia por desaparición**. Para hacer posible ello, se propondrá un texto sustitutorio. Esta decisión refleja el compromiso de la Comisión con una protección integral de las víctimas y sus familias, y asegura una respuesta normativa acorde con la realidad social y el enfoque de derechos humanos.

¿ES NECESARIO MODIFICAR EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY 30364?

El **Proyecto de Ley 4753/2022-CR** propone[29] facilitar el acceso público y sin restricciones al Registro Único de Víctimas y Agresores (RUVA), argumentando que dicha medida contribuiría a la protección y prevención de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Sin embargo, esta propuesta ha recibido opiniones desfavorables del **Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP)** y de la **Defensoría del Pueblo**, que han señalado múltiples razones por las cuales esta iniciativa no es necesaria ni viable.

El **MIMP** considera que la propuesta carece de justificación técnica suficiente, ya que no demuestra de qué manera la publicación del RUVA contribuiría efectivamente a los objetivos planteados. Por el contrario, advierte que dicha medida podría vulnerar derechos fundamentales, como la presunción de inocencia, el honor y la intimidad de las personas registradas, tanto víctimas como agresores. En particular, resalta que **la publicación masiva de datos personales podría estigmatizar a los agresores incluidos en el registro, incluso en casos donde las medidas de protección hayan sido revocadas**. Además, subraya que cualquier acción de este tipo debe evaluarse cuidadosamente a la luz de la protección de los datos personales, especialmente en el contexto de los riesgos asociados con las tecnologías de información.

Por su parte, la **Defensoría del Pueblo** señala que la normativa vigente ya ofrece mecanismos suficientes para acceder a información relevante sobre antecedentes de agresores en casos de violencia. Por ejemplo, el Decreto de Urgencia 023-2020 permite a las potenciales víctimas, familiares cercanos y personas de confianza solicitar, de manera gratuita, los antecedentes policiales de posibles agresores. Este mecanismo está diseñado para garantizar la protección y prevención de la violencia de manera focalizada y menos gravosa, respetando la confidencialidad y los derechos de las personas. La Defensoría también advierte que **la publicación masiva de los datos del RUVA podría exponer a las víctimas a situaciones de revictimización y aumentar su vulnerabilidad**. Asimismo, menciona que, **en el caso de los agresores, esta medida podría dificultar los procesos de resocialización, contrariando principios de rehabilitación**.

---

[29] El **Proyecto de Ley 4753/2022-CR** propone modificar el artículo 42 de la Ley 30364 incorporando el siguiente párrafo: *El Registro Único de Victimas y Agresores tiene carácter público, el Poder Judicial y las autoridades competentes, permitirán el acceso de la información a través de su página web, sin restricciones alguna a todo ciudadano que lo requiera.*

En línea con estas opiniones, **la Comisión de Mujer y Familia ha evaluado exhaustivamente la propuesta legislativa, concluyendo que no resulta necesaria ni viable**. La normativa actual ya contempla mecanismos que permiten prevenir y atender la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, sin comprometer derechos fundamentales. La publicación irrestricta del RUVA generaría riesgos significativos tanto para las víctimas como para los agresores, vulnerando principios constitucionales y compromisos internacionales relacionados con la protección de datos personales y la rehabilitación social.

Por lo expuesto, **la Comisión de Mujer y Familia considera que el artículo 42 de la Ley 30364 no requiere modificación alguna, dado que su redacción actual garantiza un equilibrio adecuado entre el acceso a información para prevenir la violencia y la protección de los derechos fundamentales**. En consecuencia, se concluye que el **Proyecto de Ley 4753/2022-CR** no debe ser aprobado, ratificando la suficiencia de la normativa vigente para atender los objetivos planteados por esta iniciativa.

¿ES NECESARIO MODIFICAR LOS ARTÍCULOS DE LA LEY 30364 PROPUESTOS POR EL PROYECTO DE LEY 8763/2024-CR?

El **Proyecto de Ley 8763/2024-CR** propone modificar los artículos 15-A, 15-B, 16, 16-D, 16-E, 22 y 28 de la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, al respecto el **Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP)**, a través de su informe técnico, ha manifestado una opinión favorable, considerando que la implementación del **Botón de Pánico** representa una medida legislativa adecuada para fortalecer la protección de las víctimas de violencia. Según el MIMP, esta herramienta tecnológica contribuirá a prevenir actos de violencia y a garantizar una atención diligente, célere y oportuna. Además, destacaron la coherencia de la propuesta con la Política Nacional de Igualdad de Género (PNIG) y las directivas del Poder Judicial, las cuales ya han establecido el uso del botón de pánico como una herramienta clave para casos de riesgo severo. Sin embargo, indicaron que la gestión técnica y operativa del aplicativo requiere de la participación del Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú.

Por su parte, el **Ministerio Público - Fiscalía de la Nación** también emitió una opinión favorable, resaltando que el botón de pánico es un dispositivo que permite la geolocalización en tiempo real de la víctima, lo que facilita una respuesta inmediata por parte de las autoridades. Consideraron que la propuesta legislativa fortalecerá la atención a las víctimas y facilitará el cumplimiento de las medidas de

protección, por lo que recomendaron impulsar las modificaciones a los artículos de la Ley 30364 incluidas en el proyecto.

En contraste, el **Ministerio del Interior (MININTER)** expresó una opinión desfavorable, señalando que el proyecto carece de un análisis costo-beneficio adecuado y que no contempla las implicancias logísticas, de recursos humanos y financieras necesarias para su implementación. Según el MININTER, la Policía Nacional del Perú no cuenta con los recursos programados para ejecutar este proyecto, y además se requeriría capacitación especializada para el personal encargado de la instalación y monitoreo del aplicativo, así como equipamiento adicional.

Tras evaluar las opiniones recibidas, la **Comisión de Mujer y Familia** considera que el **Proyecto de Ley 8763/2024-CR** tiene un enfoque adecuado para abordar la problemática de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Por ello, la Comisión coincide con las observaciones favorables del MIMP y el Ministerio Público en cuanto a la importancia y viabilidad del uso del botón de pánico como una herramienta preventiva y de respuesta inmediata.

Sin embargo, respecto a las observaciones del MININTER, la Comisión reconoce las limitaciones logísticas y presupuestarias señaladas y decide que la gestión y operatividad del aplicativo deberá ser asumida por el **MIMP**, en coordinación con la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, para garantizar su implementación eficiente. Esta decisión permitirá un enfoque integral en la implementación del botón de pánico, asegurando que se alinee con las capacidades institucionales existentes y las políticas de igualdad de género.

En atención a lo expuesto, la **Comisión de Mujer y Familia** impulsará las modificaciones propuestas por el **Proyecto de Ley 8763/2024-CR** para incorporar el botón de pánico como una medida tecnológica dentro de la Ley 30364. Asimismo, encargará al MIMP la responsabilidad de coordinar con las entidades pertinentes, garantizando que esta herramienta sea implementada de manera eficaz, contribuyendo así a la protección y el bienestar de las víctimas de violencia.

¿ES NECESARIO MODIFICAR EL CÓDIGO PENAL PARA INCORPORAR EL DELITO DE CIBERACOSO?

El **Proyecto de Ley 8350/2023-CR** propone también incorporar un nuevo delito denominado **"Ciberacoso"** en el artículo 176-D del Código Penal. La redacción

sugerida tipifica esta conducta como el uso de tecnologías de la información y comunicación para acosar o intimidar, afectando la dignidad y el honor de las mujeres y los integrantes del grupo familiar, sancionándolo con penas privativas de libertad de dos a cinco años, días-multa e inhabilitación.

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) considera que la propuesta de incorporar el ciberacoso como un nuevo tipo penal es innecesaria, ya que la legislación vigente, especialmente el Código Penal, contempla figuras que sancionan conductas relacionadas. En particular, el **artículo 151-A (Acoso)** y el **artículo 176-B (Acoso Sexual)** ya incluyen la utilización de tecnologías de la información y comunicación para la comisión de estos delitos.

La **Fiscalía de la Nación** opina que la propuesta resulta parcialmente viable. Reconoce la importancia de sancionar el ciberacoso como una forma de violencia, pero considera que este ya está contemplado en las modificaciones recientes al Código Penal. Sin embargo, destaca la necesidad de reforzar la aplicación efectiva de estas disposiciones existentes y promover una adecuada capacitación de los operadores de justicia en delitos relacionados con tecnologías digitales.

La organización **Hiperderecho** manifiesta que la propuesta no es adecuada, ya que los delitos de ciberacoso, acoso sexual y chantaje sexual ya están regulados en el ordenamiento jurídico penal, especialmente a través del **Decreto Legislativo 1410**, que introdujo modificaciones al Código Penal en esta materia. Asimismo, recalca que crear un nuevo tipo penal podría generar redundancias y dificultar la coherencia normativa.

La **Comisión de Mujer y Familia** ha evaluado las opiniones recibidas, así como la reciente promulgación de la **Ley 32169**. Esta ley modificó el **artículo 176-B del Código Penal**, incluyendo explícitamente la utilización de tecnologías de la información o comunicación en la configuración del delito de acoso sexual, y añadió un nuevo artículo **176-D**, que sanciona con severidad el acoso sexual a menores de hasta catorce años mediante el uso de tecnologías.

En este contexto, las disposiciones ya vigentes:

- Tipifican el acoso sexual y el acoso a menores como delitos graves, incluyendo conductas realizadas mediante tecnologías digitales.
- Refuerzan las herramientas legales para abordar y sancionar el ciberacoso, especialmente en situaciones que afectan a menores de edad.

Considerando estos antecedentes, la **Comisión de Mujer y Familia** concluye que:

1. La creación de un nuevo tipo penal denominado "Ciberacoso" podría generar redundancia con las disposiciones ya existentes en el Código Penal, que incluyen el uso de tecnologías digitales como un medio agravante en delitos de acoso.
2. La legislación vigente, reforzada por la Ley 32169, responde adecuadamente a la problemática planteada por el **Proyecto de Ley 8350/2023-CR**, por lo que no es necesario incorporar un nuevo tipo penal.

En virtud de lo expuesto, la **Comisión de Mujer y Familia coincide con lo señalado por el MIMP y las observaciones de Hiperderecho** y concluye que la propuesta de modificar el Código Penal para incorporar el ciberacoso como un nuevo tipo penal **no es necesaria**. Se resalta que las disposiciones existentes ya abordan de manera integral las conductas que pretende sancionar el proyecto. Por lo tanto, este extremo del **Proyecto de Ley 8350/2023-CR** debe ser desestimado.

VI. ANÁLISIS DEL MARCO NORMATIVO Y EFECTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA.

La presente propuesta normativa se encuentra alineada con la Constitución Política del Perú, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer, Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Asimismo, con las presentes iniciativas legislativas, de aprobarse, se modificarán los artículos **8, 15-A, 15-B, 16, 16-D, 17, 17-A, 22 y 28 de la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar**, así como se deberá adecuar su reglamento, reconociendo como un tipo de violencia la desaparición por particulares, así mismo la instalación del botón de pánico como una herramienta efectiva para ampliar la protección de las mujeres y los integrantes del grupo familiar que sufren violencia.

Por todo ello, las modificatorias a la Ley 30364, ley para prevenir, sancionar, y erradicar la violencia contra las mujeres y grupo familiar, fortalecerá la legislación nacional con relación a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, promoverá las relaciones basadas en el respeto y la igualdad, concientización y sensibilización sobre la violencia en general.

VII. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

El análisis costo beneficio sirve como método de análisis para conocer en términos cuantitativos los impactos y efectos que tiene una propuesta normativa sobre diversas variables que afectan a los actores, la sociedad y el bienestar general, de tal forma que permite cuantificar los costos y beneficios.

En ese sentido, la implementación de la propuesta legislativa que reconoce la desaparición por particulares como un tipo de violencia y, además, establece la instalación del botón de pánico desde la denuncia policial, tiene beneficios sustanciales que justifican los costos asociados. En primer lugar, el reconocimiento de la desaparición por particulares como una forma específica de violencia contra las mujeres refuerza el marco jurídico nacional y alinea la legislación con estándares internacionales de protección de derechos humanos, como la Convención de Belém do Pará. Este cambio permitirá una atención más efectiva y específica a las víctimas, reduciendo los vacíos legales que dificultan la sanción y prevención de esta grave problemática.

Por otro lado, la implementación del botón de pánico desde el momento de la denuncia ofrece una herramienta tecnológica de respuesta inmediata que puede salvar vidas. Este dispositivo no solo permite una geolocalización precisa de las víctimas en situaciones de riesgo, sino que también actúa como un disuasivo para los agresores, al saber que las autoridades están equipadas para responder rápidamente. Esto mejora significativamente la eficacia de las medidas de protección dictadas por el sistema de justicia.

En términos de costos, la inversión inicial para desarrollar, implementar y mantener el sistema del botón de pánico, incluyendo capacitación al personal policial, es compensada por los beneficios en la prevención de la violencia y la protección de las víctimas. La reducción de los casos de violencia severa, feminicidios y desapariciones conlleva un impacto positivo en la salud pública y en la disminución de gastos derivados de tratamientos médicos, intervenciones judiciales prolongadas y costos emocionales para las familias afectadas.

Asimismo, el fortalecimiento del sistema de monitoreo mediante la tecnología refuerza la confianza en las instituciones encargadas de la protección de las víctimas, promoviendo una cultura de denuncia y prevención. Esto genera un impacto positivo en la percepción ciudadana y contribuye al cumplimiento de las políticas de igualdad de género y no violencia.

En conclusión, los beneficios sociales, legales y humanos de estas medidas superan con creces los costos económicos asociados, garantizando una mayor eficacia en la prevención, protección y erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. La inversión en estas herramientas es una apuesta sólida por una sociedad más segura, justa y equitativa.

VIII. CONCLUSIÓN

En ese sentido, la Comisión de Mujer y Familia, de conformidad con lo establecido por el literal b) de artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República, recomienda la **APROBACION** del presente dictamen recaído en los **Proyectos de Ley 4753/2022-CR; 7429/2023-CR; 7689/2023-CR; 8350/2023-CR; 8763/2024-CR y 9138/2024-CR**, mediante el cual se propone el siguiente TEXTO SUSTITUTORIO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA:

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE MODIFICA LA LEY 30364 —LEY PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR—, A FIN DE RECONOCER COMO VIOLENCIA LA DESAPARICIÓN POR PARTICULARES E INCORPORAR EL BOTÓN DE PÁNICO COMO MEDIO DE PROTECCIÓN

Artículo único. Modificación de los artículos 8, 15-A, 15-B, 16, 16-D, 17, 17-A, 22 y 28 de la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar

Se modifican los artículos 8 —incorporando el literal e—, 15-A —párrafos primero, segundo y tercero—, 15-B —párrafo primero—, 16 —incorporando el literal e—, 16-D —párrafo primero—, 17 —párrafos segundo y tercero—, 17-A —párrafos segundo y tercero—, 22 —numeral 10 e incorporando el numeral 13— y 28 —incorporando un párrafo tercero— de la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, en los siguientes términos:

> "**Artículo 8. Tipos de violencia**
>
> Los tipos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar son:

[...]

e) **Violencia por desaparición por particulares. Es la privación de libertad cometida por uno o varios particulares que afecta a una mujer o integrante del grupo familiar. No se requiere probar la finalidad de la desaparición para que esta, por sí sola, constituya un acto de violencia en el marco de esta ley.**

Artículo 15-A. Trámite de la denuncia presentada ante la Policía Nacional del Perú

La Policía Nacional del Perú aplica la ficha de valoración de riesgo y, en tanto se dicten y ejecuten las medidas de protección, **sin importar el nivel de riesgo, instala en el celular de la denunciante víctima la aplicación del Botón de Pánico, brindando capacitación sobre las obligaciones y responsabilidades para su uso adecuado. Si la víctima es menor de edad, la aplicación se instala en el celular del padre, madre, apoderado o tutor, siempre que no sean los denunciados. En casos donde la denunciante víctima no disponga de un equipo celular y el caso sea de riesgo severo, la Policía Nacional del Perú** prioriza el patrullaje integrado en las inmediaciones del domicilio de la víctima o de sus familiares, en coordinación con el serenazgo y las organizaciones vecinales; y otras acciones en el marco de sus competencias.

Adicionalmente, la Policía Nacional del Perú comunica los hechos denunciados **y la instalación, activación o estado de uso de la aplicación del Botón de Pánico** al representante del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de su jurisdicción para la atención de la víctima en los Centros Emergencia Mujer y, de ser el caso, en los hogares de refugio temporal. Cuando los Centros Emergencia Mujer no puedan brindar el servicio, comunica a la Dirección Regional de Defensa Pública correspondiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Culminado el Informe o Atestado Policial y dentro de las veinticuatro (24) horas de conocido el hecho, la Policía Nacional del Perú remite copias de lo actuado, **incluyendo información detallada sobre la instalación, activación o estado de uso de la aplicación del Botón de Pánico, cuando este haya sido implementada,** a la fiscalía penal y al juzgado de familia, de manera simultánea, a fin de que actúen en el marco de sus competencias.

[...].

Artículo 15-B. Trámite de la denuncia presentada ante el Ministerio Público

La fiscalía penal o de familia, según corresponda, aplica la ficha de valoración de riesgo **y considera la información sobre el monitoreo y las alertas generadas por la aplicación del Botón de Pánico, cuando esta haya sido instalada** y dispone la realización de los exámenes y diligencias correspondientes, remitiendo los actuados en el plazo de veinticuatro (24) horas al juzgado de familia, solicitando la emisión de las medidas de protección y cautelares a que hubiera lugar.

[...].

Artículo 16. Proceso especial

El proceso especial de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar se realiza teniendo en cuenta lo siguiente:

[...]

e) **El Juzgado de Familia, basado en el informe sobre el monitoreo y las alertas generadas por la aplicación del Botón de Pánico, evaluará su efectividad y dispondrá la ratificación o la suspensión de su uso, según corresponda.**

Artículo 16-D. Investigación del delito

La fiscalía penal actúa de acuerdo a lo señalado por el Código Procesal Penal vigente, realiza todas las actuaciones necesarias para la investigación de los hechos, **incluyendo el análisis de la información sobre el monitoreo y las alertas generadas por la aplicación del Botón de Pánico, cuando esta haya sido instalada,** y puede requerir información al juzgado de familia, a fin de conocer si persiste y continúa el ejercicio de violencia. Asimismo, debe requerir información a la Policía Nacional del Perú y al Poder Judicial sobre los antecedentes de violencia de la persona denunciada, cuando estos no obren en el expediente.

[...].

Artículo 17. Flagrancia

[...]

En estos casos, la policía redacta un acta en la que se hace constar la entrega de la persona detenida, **la instalación o no de la aplicación del Botón de Pánico** y las demás circunstancias de la intervención, debiendo comunicar inmediatamente los hechos a la fiscalía penal para continuar con las investigaciones correspondientes y al juzgado de familia para que se pronuncie sobre las medidas de protección y otras medidas para el bienestar de las víctimas.

Asimismo, se aplicará el procedimiento de flagrancia cuando la víctima de violencia utilice la aplicación del Botón de Pánico por encontrarse en situación de riesgo. En estos casos, la Policía Nacional del Perú, con el apoyo del serenazgo, acudirá al lugar donde se encuentre geolocalizada la víctima y actuará conforme a sus competencias.

Artículo 17-A. Flagrancia en casos de riesgo severo

[...]

En el primer supuesto del párrafo anterior, en la formalización de la denuncia o el inicio de la investigación preparatoria, la fiscalía penal solicita al juzgado penal que emita las medidas de protección a favor de la víctima, para salvaguardar su vida e integridad; **adicionalmente, requerirá la continuidad en el uso de la aplicación del Botón de Pánico, cuando corresponda.**

El juzgado penal se pronuncia sobre las medidas de protección en la audiencia única de incoación del proceso inmediato, y, en un plazo no mayor de veinticuatro (24) horas, remite copias certificadas al juzgado de familia, a fin de que las ratifique, amplíe o varíe, según corresponda. **Durante esta etapa se evaluará la continuidad o suspensión del uso de la aplicación del Botón de Pánico.**

Artículo 22. Objeto y tipos de medidas de protección

El objeto de las medidas de protección es neutralizar o minimizar los efectos nocivos de la violencia ejercida por la persona denunciada, y permitir a la víctima el normal desarrollo de sus actividades cotidianas; con la finalidad de asegurar su integridad física, psicológica y sexual, o la de su familia, y resguardar sus bienes patrimoniales.

El juzgado las dicta teniendo en cuenta el riesgo de la víctima, la urgencia y necesidad de la protección y el peligro en la demora.

Entre las medidas de protección que pueden dictarse en los procesos por actos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar se encuentran las siguientes:

[...]

10. Tratamiento psicológico para la recuperación emocional de la víctima. **Además, para sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad, en caso de violencia por desaparición por particulares.**

[...]

13. **Continuidad del uso de la aplicación del Botón de Pánico, valorándose la información sobre el monitoreo y las alertas generadas por la aplicación. Dicha continuidad podrá disponerse hasta el término del proceso judicial o la etapa que se considere pertinente, según corresponda.**

Artículo 28. Valoración del riesgo

[...]

Asimismo, la ficha de valoración de riesgo deberá incluir información sobre la instalación de la aplicación del Botón de Pánico en el celular de la denunciante víctima de violencia. En caso de que la víctima sea menor de edad, se deberá consignar el registro de la persona responsable a quien se haya instalado la aplicación, ya sea el padre, madre, apoderado o tutor, según corresponda. Si no se ha instalado la aplicación, se deberá indicar las medidas alternativas que se aplicarán en el caso denunciado."

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA. Adecuación del Reglamento la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar

El Poder Ejecutivo adecuará el Reglamento de la Ley 30364 —Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar—, aprobado mediante Decreto Supremo 009-2016-MIMP, a las modificaciones previstas en la presente ley en un plazo no mayor de noventa días calendario, contados a partir de su entrada en vigor.

SEGUNDA. Mecanismos de cooperación

El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, en coordinación con el Poder Judicial establecerá los mecanismos de cooperación necesarios para la gestión, mantenimiento y progresiva implementación del uso de la aplicación del Botón de Pánico por parte de la Policía Nacional del Perú.

Adicionalmente, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior, formulará las directivas y procedimientos respectivos para la instalación, uso, configuración, monitoreo, seguimiento y evaluación de la aplicación del Botón de Pánico.

TERCERA. Financiamiento

La implementación de lo establecido en la presente ley se financia con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Dese cuenta,
Sala de Sesiones del Congreso de la República
Lima, 25 de noviembre de 2024.

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: MUÑANTE BARRIOS Alejandro FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27/11/2024 14:58:12-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: LIMACHI QUISPE Nieves Esmeralda FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 26/11/2024 14:59:10-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: LIMACHI QUISPE Nieves Esmeralda FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 26/11/2024 14:59:17-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: INFANTES CASTAÑEDA Mery Eliana FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27/11/2024 09:19:42-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: BARBARAN REYES Rosangella Andrea FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 26/11/2024 16:45:12-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: PABLO MEDINA Flor Aidee FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 25/11/2024 19:25:20-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: JAUREGUI MARTINEZ DE AGUAYO Maria De Los Milagros Jackeline FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27/11/2024 10:53:12-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: LOPEZ MORALES Jeny Luz FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27/11/2024 11:32:40-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: SANTISTEBAN SUCLUPE Magally FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27/11/2024 16:16:34-0500

[Siguen firmas ...]

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: TAIPE CORONADO Maria Elizabeth FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27/11/2024 16:53:03-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: PORTERO LOPEZ Hilda Marleny FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27/11/2024 18:27:20-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: ALCARRAZ AGUERO Yorel Kira FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27/11/2024 17:15:22-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: VASQUEZ VELA Lucinda FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 28/11/2024 09:11:04-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: CORDOVA LOBATON Maria Jessica FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 29/11/2024 18:35:53-0500